

CONVICCIÓN 16/9/79 5

Sobre derechos humanos y el futuro democrático habló Ordóñez

"Yo creo, debo creer lo que dice un hombre de la importancia del embajador hasta hace ocho días en las Naciones Unidas, Andrew Young, que ha declarado públicamente, sin haber sido negado, que en los Estados Unidos no hay cientos, sino miles de presos políticos. Esto no ha sido desmentido, porque el Presidente Carter sólo ha dicho que no le satisfacía lo que había manifestado Young, que es un hombre de mucho prestigio en los Estados Unidos. Esto está de acuerdo con una declaración de Carter del año pasado, con motivo del vigésimo centenario del Colegio de Abogados de Los Angeles, en donde dice que los Estados Unidos no tienen derecho a reclamar el cumplimiento de los derechos humanos en otros países, cuando no los cumple dentro de su propio territorio."

Con estas palabras el presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, doctor Manuel V. Ordóñez, definió la situación imperante en los Estados Unidos con relación a los derechos humanos, en momentos que una comisión de la OEA sobra esa cuestión visita la Argentina.

Acerca de la posición de la gestión Carter sobre tales derechos, el doctor Ordóñez continuó diciendo —en un programa televisivo— que "lo exigen a los demás países, creo que ellos son víctimas también de esta campaña universal movida por fuerzas oscuras. Le voy a contar una anécdota: una niña argentina que trabaja en la ONU en Ginebra se encontró con una universitaria y habló pestes de la Argentina y entonces le advertí que cómo podía hablar así de la Argentina. Me respondió que 'a la Argentina hay que destruirla, porque es la que nos ha vencido'.

"El concepto es que la lucha contra la subversión, en el único lugar que ha tenido éxito es en la Argentina", dedujo Ordóñez.

Al preguntársele su opinión, como hombre de trayectoria democrática, sobre cómo hubo que enfrentar a la guerrilla en la Argentina debido a las represalias que se tomaron con los jueces que juzgaron a los guerrilleros, el doctor Manuel Ordóñez expresó: "Eso es una prueba de la necesidad de los tribunales militares para cierta clase de juicios. Son víctimas todos los que fueron de la famosa cámara especial, o cámara federal especial, que tuvo que sentenciar y sentenció, en muchísimos casos, contra los guerrilleros. De entonces hasta aquí, no hubo ninguna sentencia contra los guerrilleros por una cámara civil o federal".

"Se plantea el problema fundamental de este tiempo —dijo Ordóñez— ¿Cómo hacemos nosotros para recrear en nuestro país una democracia? Yo diría en una primera observación, que para ser demócrata no es necesario ser tonto. De modo que la democracia es un régimen, que si no se sabe defender a sí mismo, no sirve. Lo primero que debemos establecer es si es un régimen válido o inválido.

"Ese es el problema, que yo invito a los jóvenes, a que razonen. La democracia —agregó— no es sólo como pareciera en algunos países, el acto electoral puro, el día de la elección.

"Existen cosas —agregó Ordóñez— que son más fundamentales, que es la vida, la vida en sociedad, en el respeto de la persona humana. El régimen de vida democrático. Las elecciones son parte, pero ni es todo, ni es lo principal. El régimen democrático, tiene como base la amistad cívica que decía mi gran maestro Maritain, 'la amistad cívica es decir, tenemos que ser amigos para edificar una sociedad en que las libertades y derechos de todos estén compensados.'"

CONVICCIÓN 16/9/79

CRÓNICA 16 de Setiembre de 1979

EL ESTADO DE DERECHO

CORDOBA, 16 (De nuestro corresponsal). — El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Osvaldo Bearzotti, sostuvo que "si la emergencia nacional ha pasado, felizmente" es el momento de llegar "a la inmediata instalación del estado de derecho". Añadió que "y no se dirá que el estado de derecho no puede ser restablecido en plenitud porque se opone a ello la continuidad del proceso de reorganización nacional, cuyo éxito todos deseamos y a cuyos objetivos explícitos estamos sumados, porque tal afirmación importaría tanto como decir que dentro del tópico de la reorganización nacional el derecho no ocupa un lugar prominente".

Bearzotti, expuso esos conceptos al asumir ayer nuevamente la titularidad del Colegio de Abogados local, función para la cual fue reelecto en recientes comicios. En la oportunidad, dijo que no puede prolongarse en forma indefinida "el estado de necesidad" y que, pasada la emergencia que le dio origen y justificación "debe cesar para dar paso a la reinstalación de las instituciones permanentes de la república". Agregó que "al estado de emergencia debe suceder en toda su extensión el estado de derecho" y aseguró que quien sostuviera lo contrario estaría "esgrimiendo un simple pretexto, nada más que un pretexto, para seguir actuando discrecionalmente y con el arreglo a normas que están reñidas con el funcionamiento normal de una sociedad civilizada".

Explicó seguidamente que "decir estado de derecho es, ciertamente, algo muy distinto que hacer un mero juego de palabras. El más siniestro sería confundirlo con el derecho del Estado. Porque decir estado de derecho es reconocer la plena vigencia de un sistema de reglas que dimanen de una superior, soberana y reguladora, que orienta y define todo el conjunto de normas que de ella se van o que en ella se inspiran o en ella encuentran su infranqueable barrera".

Bearzotti dijo luego que "no puede haber, si se habla seriamente y responsablemente del restablecimiento del estado de derecho, teoría alguna que sostenga con seriedad la contemporánea vigencia de otras normas del mismo o superior rango que "a ley suprema" reiterando que "no basta para que haya realmente un estado de derecho, que se dé tal nombre a un conjunto de normas que dicta el poder político para sus propios fines y sus propias necesidades".

DERECHOS HUMANOS Y UN DEBATE POLITICO

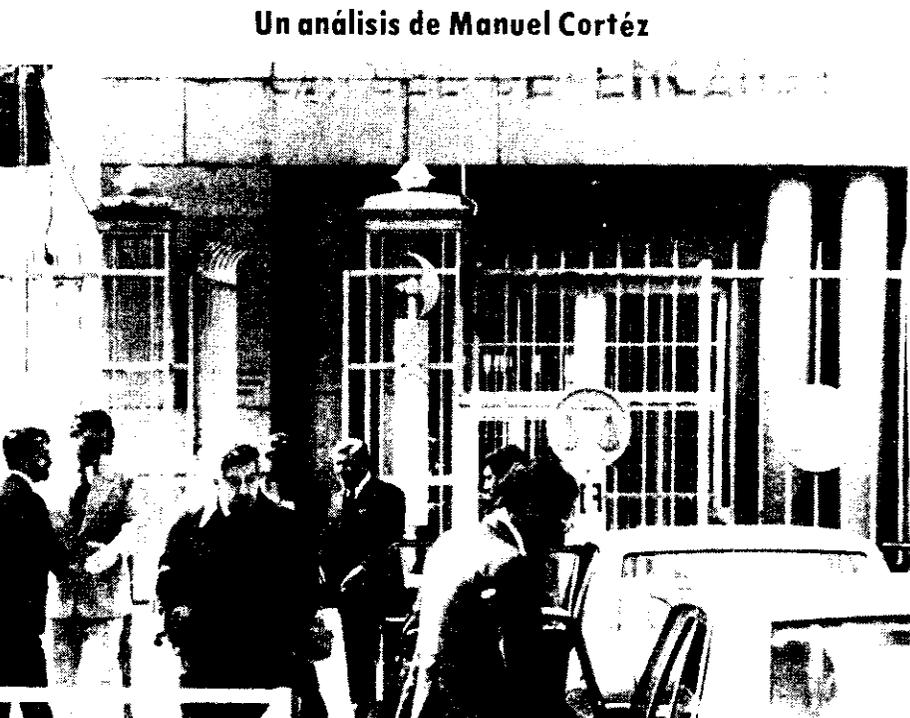
Como era de esperar, la prolongada visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado ocasión a un debate político interno, no siempre referido al tema que ha traído al país a los observadores de la OEA, que por momentos ha alcanzado tonos de **aspiranza y que, en conjunto, impresiona como poco fecundo.** Al cabo de esta experiencia, muchas personas que difícilmente hubieran coincidido con el general Onganía en cualquier otro asunto, opinan que el ex presidente no estuvo desacerado al negarse a tomar parte en esta polémica, cuyos efectos negativos parecen ser más que sus posibles ventajas.

En efecto, así como es legítimo que se reclame del gobierno una política firme en el lento proceso de restablecimiento del orden constitucional — que es, después de todo, la verdadera cuestión de fondo —, resulta lamentable que esa acción se realice en presencia de un grupo de funcionarios extranjeros, que a pesar de haber actuado hasta ahora con plausible discreción, despliegan una actividad de virtuales inspectores internacionales, que realmente desagradan a los argentinos más celosos del concepto de soberanía. Por otra parte, si bien es cierto que no todos los que opinan sobre los temas en discusión tienen autoridad personal o histórica para hacerlo, también lo es que algunas de las reacciones oficiales parecen desproporcionadas en relación con la realidad de los hechos.

La Comisión inició sus tareas en los días en que se celebraba en las calles el notable triunfo del equipo juvenil de fútbol, y a un grupo de locutores y comentaristas de la radio y la televisión se le ocurrió que esa fiesta popular podía exhibirse como ejemplo de armonía política interna, por lo que convenía estimularla por todos los medios, incluso algunos de gusto bastante dudoso. Fue una de las frecuentes ocasiones en que el gobierno, como tal, actuó con más sobriedad que los que se proponen servirlo, y así lo ha entendido mucha gente que algo entiende de estas cosas, y también de fútbol.

En los días siguientes, cada entrevista de la Comisión con alguna persona de significación pública, fue propicia para

propio ángulo, la respuesta oficial estuvo bien fundada; pero una vez más el verdadero tema, el de los derechos humanos, quedó postergado. Como queda postergado en el pegadizo "slogan" difundido en estos días, que afirma que "los argentinos somos derechos y humanos", porque aunque esto sea cierto, ni la palabra "derechos" ni la palabra "humanos" tienen en esta frase publicitaria el mismo sentido que en la expresión internacionalmente acuñada de "derechos humanos"; de modo que la cuestión de fondo también se omite de esta manera.



Un análisis de Manuel Cortéz

Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abandonan la cárcel de Olmos, luego de efectuar una visita al establecimiento de 30 minutos. La visita de la CIDH abrió un debate político.

que el respectivo anfitrión produjera una larga declaración. Previsiblemente, Lanusse y Levingston se solidarizaron sin reservas con la acción del gobierno que encabezan sus camaradas de armas, aunque el primero hizo algunas reflexiones no exentas de objetividad. Frondizi guardó silencio, y el radicalismo, luego de la visita de la Comisión a Balbín, se expidió con un extenso documento que, en opinión de la mayoría de los observadores, tuvo todas las características de los textos que se preparan para salir del paso porque sin decir nada que pueda ser refutado, soslayaba de hecho una toma de posición ante la presencia concreta del grupo interamericano.

De tal modo, quedó al señor Sábato, escritor de relieve pero sin representati-

vidad política personal, el privilegio de enunciar con envidiable claridad y decisión cívica los extremos fundamentales del problema de los derechos y las garantías, en un documento que afronta además, sin la menor ambigüedad, el compromiso intelectual de enjuiciar libremente el comportamiento de los regímenes comunistas en este aspecto.

Después pasaron a primer plano los dirigentes peronistas, con la señora de Perón, Bittel y Rocca a la cabeza. Y si la autoridad histórica de ese sector de opinión para hablar de derechos y libertades públicas es bastante cuestionable, no cabe duda de que supieron ocupar el espacio político disponible, al punto de que el gobierno los distinguió con una dura réplica. Objetivamente, desde su

Mucho más directa, por ejemplo, fue la declaración del ex camarista federal Guerrero Leconte, que atribuye al peronismo la responsabilidad histórica de haber introducido en el país los excesos represivos como sistema, en el periodo 1946-1955; ero no obstante la veracidad de los hechos que recuerda, elude toda referencia a la época presente por la reserva que le exige su reciente actuación como magistrado judicial.

Por otra parte, las cámaras empresarias, las asociaciones de productores rurales, los sindicatos de conducción peronista ubicada en la línea tradicional, y las organizaciones conservadoras y anti-comunistas, inundaron prácticamente las redacciones de los medios periodísticos durante la última semana, con declaraciones de apoyo a la situación actual y

de repudio al terrorismo. Es verdad que también los sectores que reclaman la normalización del orden jurídico y constitucional, condenan claramente a la violencia extremista; pero desde el punto de vista cuantitativo, las adhesiones más o menos incondicionales al gobierno y a su línea de acción han "copado" en estos días los medios de difusión.

Será interesante verificar, a su debido tiempo, cómo interpretan estas definiciones sectoriales los miembros de la CIDH, que son en su mayoría abogados y políticos con experiencia en esta clase de controversias. Lo que ya parece bastante claro, es que hubiera sido más constructivo que el país profundizara el diálogo franco y sin complacencias sobre sus propios problemas, al margen de presencias ajenas y oficiosas que poco pueden contribuir a resolverlos.

SIN NOVEDADES EN LA ACCION CONTRA BITTEL

RIO GALLEGOS — Contrariamente a lo esperado, no hubo novedades en torno al anuncio del juez federal, de esta ciudad, Federico Pinto Cramer, en el sentido de iniciar actuaciones judiciales contra el vicepresidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista Deolindo Bittel.

Como se recordará el magistrado anunció que incriminará a Bittel por las declaraciones que formuló al término de su entrevista con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en el país.

Según trascendió, se procedería el lunes próximo a habilitar el juzgado con el propósito de que el procurador fiscal, Víctor Novarb, se expida en la causa.

Los fundamentos esgrimidos por el magistrado se basan en la presunta infracción de la Ley 20840 de seguridad nacional, la que fue dictada por el gobierno justicialista cuando Bittel era gobernador de la provincia del Chaco.

CRÓNICA 16-9-79

SIN NOVEDADES EN EL JUICIO A BITTEL

RÍO GALLEGOS, 16 (De nuestro corresponsal). — No hay novedades con respecto al anuncio del juez federal de esta ciudad, Federico Pinto Cramer en el sentido de iniciar actuaciones judiciales contra el vicepresidente en ejercicio de la presidencia del consejo nacional del Partido Justicialista, Dr. Felipe Bittel, por las declaraciones que éste formulara en Buenos Aires a tér-

mino de su entrevista con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se refería a la situación en el país.

Si bien pese a lo esperado nada se concretó y no se brindó información alguna, trascendió que mañana lunes se procedería a habilitar el juzgado con el propósito de que el procurador fiscal

Victor Novaro, se expida en la causa.

Los fundamentos esgrimidos por el juez Pinto Cramer para iniciar actuaciones contra Bittel, se radican en la presunta infracción de la ley 20.840, de Seguridad Nacional, norma dictada por el gobierno justicialista en momentos en que el mencionado dirigente ocupaba el cargo de gobernador en la provincia del Chaco.

La causa por el documento de Deolindo Bittel

No se registraron ayer novedades en Río Gallegos, respecto del anuncio del juez federal con asiento en dicha ciudad santacruceña, **Federico Pinto Crámer**, en el sentido de iniciar actuaciones judiciales contra el vicepresidente primero del Consejo Nacional del Partido Justicialista, **Deolindo Felipe Bittel**.

El magistrado anunció anteayer que lo incriminara por el contenido de la declaración que hizo pública luego de la entrevista que mantuvo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según trascendió en la ciudad sureña, mañana se procedería a habilitar el juzgado, a fin de que el procurador fiscal, **Victor Novaro**, se expida en la causa.

El magistrado sostiene que el dirigente político ha infringido la ley 20.840, de "seguridad".

En la conferencia de prensa ofrecida ayer a los periodistas que tienen la misión de informar sobre las actividades de la CIDH en nuestro país, el secretario ejecutivo de la Comisión, **Edmundo Vargas Carreño**, fue consultado acerca de la determinación del juez.

"Yo no quiero pronunciarme sobre esa situación concreta, porque está bajo la jurisdicción de la justicia argentina y no tengo elementos para pronunciarme sobre ese caso particular", respondió el jurista.

◆ Desmentida

En relación con recientes decla-

raciones de apoyo al documento difundido por el vicepresidente del Partido Justicialista, escribano **Deolindo Felipe Bittel**, se han producido aclaraciones de algunas personalidades de esa línea política que, como el doctor **Leopoldo Frenkel**, no las firmaron ni fueron consultadas previamente sobre su parecer.

En tal sentido, el doctor **Ricardo Guardo**, ex primer presidente de la Cámara de Diputados de la Nación por el justicialismo, a partir de 1946, y ex embajador en Italia, hizo saber a este diario que se encontraba en el mismo caso que el ex intendente capitalino **Frenkel**. No firmó la ratificación ni se lo consultó para hacerlo.



La popular Doña Dominga, acompañada por uno de sus hijos, también se presentó a reclamar derechos humanos.

HABLANDO DE DERECHOS HUMANOS, ¿Y "RINGO"?

La madre y uno de los hermanos del desaparecido Oscar Natalio Bonavena, fueron atendidos durante el transcurso de 15 minutos por uno de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los familiares del boxeador asesinado, presentaron a la CIDH un pedido para que agotaran los medios a su alcance para que prosiga la investigación del caso, "reclamándoles justicia".

La señora Dominga de Bonavena y José, uno de los hijos, llegaron a la sede de la comisión en el Ford Falcon chapa de Capital 117975 a las 14.45, y transformaron cola con otros denunciantes, ingresaron al edificio de la Avda. de Mayo, a las 15.05. Momentos antes, José Bonavena entregó a los periodistas un documento — copia del que entregarían a

la Comisión —, que expresa: "Ante la enorme preocupación que advertimos tiene la Honorable Comisión para que se respeten los Derechos Humanos de los argentinos, recurrimos a ustedes para reclamar justicia ante el brutal asesinato de nuestro hermano Oscar Natalio Bonavena, ultimado en Reno, Nevada, Estado Unidos de Norteamérica, y cuyo verdugo goza de libertad ante el amparo del poder del dinero y la corrupción de los funcionarios. Oscar Natalio Bonavena cayó asesinado y el autor de su exterminio goza de todas las libertades; a Oscar no le limitaron los derechos humanos, fueron mucho más allá: le quitaron el derecho más sagrado. Pero ninguna comisión se preocupó por saber quiénes cometieron la violación. Por eso estamos acá.

Los Bonavena fueron atendidos por el comisionado Della Dodd quien les expresó que "tendrían en cuenta la denuncia y se ocuparían del caso". Cuando le solicitaron más información — comunicó José Bonavena — les dijeron que tomaran contacto con su abogado personal en el consulado argentino en Nevada, a lo que accedieron. La popular Doña Dominga y su hijo dejaron la sede de la comisión a las 15.25. Ya en la calle, ante requerimientos de los periodistas, José declaró que habían sido tratados cordialmente. "Ahora veremos si es verdad o mentira lo que dicen los de esta comisión porque si se ocupan de los derechos humanos — comentó — también deben ocuparse de nuestro caso y de la corrupción política, judicial que existe en Estados Unidos".

RIO GALLEGOS: SIN NOVEDADES EN LAS ACTUACIONES CONTRA DEOLINDO BITTEL

RIO GALLEGOS, 15 (De nuestro corresponsal). — No se registraron en la jornada de hoy novedades con respecto del anuncio del juez federal de esta ciudad, Federico Pinto Cramer en el sentido de iniciar actuaciones judiciales contra el vicepresidente en ejercicio de la presidencia del consejo nacional del Partido Justicialista, Deolindo Felipe Bittel, por las declaraciones que éste formulara en Buenos Aires al término de su entrevista con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se refería a la situación en el país.

Si bien pese a lo esperado nada se concretó y no se brindó información alguna, trascendió que el lunes venidero se procedería a habilitar el juzgado con el propósito de que el procurador fiscal, Víctor Novaro, se expida en la causa.

Los fundamentos esgrimidos por el juez Pinto Cramer para iniciar actuaciones contra Bittel, se radican en la

presunta infracción de la ley 20.840, de Seguridad Nacional, norma dictada por el gobierno justicialista en momentos que el mencionado dirigente ocupaba el cargo de gobernador en la provincia del Chaco.

♦ LA CIDH, EN TUCUMAN

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 15 (De nuestro corresponsal). — Con la recepción de no menos de 150 denuncias sobre personas presuntamente desaparecidas, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron hoy, poco después del mediodía, su gestión, en esa provincia.

Los integrantes de la CIDH concedieron numerosas entrevistas en el hotel Versailles donde se constituyeron encabezados por el doctor Manuel Velazco Clark. Además, esta mañana procedentes de Córdoba, arribaron el doctor Robert Norris y la señora Yoll de Toro.

Norris, incluso, realizó entrevistas en

la vereda del audido hotel, pudiéndose observar que llevaba oculto un grabador en el que registraba las conversaciones con los denunciantes de presuntas violaciones de derechos humanos, a los que indicó podrían ampliar información remitiéndola a la sede de la OEA en Washington.

Entre las audiencias concedidas, tuvo lugar una al "Movimiento a Favor de los Desaparecidos" y a un grupo de estudiantes universitarios. Estos últimos destacaron el "ataque marxista que sufrió la universidad" y la dura "tarea que costó reconstruirla una vez recuperada".

♦ PUNTO FINAL, EN CORDOBA

CORDOBA, 15 (De nuestro corresponsal). — Con la partida del doctor Robert Norris y la señora Yoll de Toro hacia Tucumán, concluyó la visita a esta provincia de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2

CLARIN

16-9-79

16. 9. "Clarín"

Tucumán: finalizó la tarea

TUCUMAN (De nuestra agencia). — Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitaron esta ciudad concluyeron su cometido en la víspera "con toda normalidad y sin ningún tropiezo", según expresó el abogado peruano Manuel Velazco Clark momentos antes de emprender el vuelo de regreso a la Capital Federal. Junta-

mente con otro asesor de la Comisión, el abogado norteamericano Robert Norris, y sus respectivas secretarías. Velazco Clark recibió ayer denuncias de desapariciones y otras presuntas violaciones de los derechos humanos en el hotel Versailles. Pero también concedieron entrevistas a grupos pertenecientes al Partido Comunista y a otra agrupación política

que los miembros de la Comisión evitaron identificar, con quienes, dijeron, se dialogó sobre asuntos relacionados con nuestra misión. Los dos asesores trabajaron por separado, para facilitar la atención de las personas que aguardaban ser recibidas. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán concurren también a fin de denun-

ciar "la violación a nuestros derechos como estudiantes universitarios y como ciudadanos durante los años 1972 a 1975 por los miembros de ideologías contrarias a nuestro ser nacional", según dijeron en una declaración. Durante la jornada de ayer, la mesa directiva de la Comisión de Solidaridad y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo recordó a los caídos por los ataques de la subversión con una misa que se ofició por la tarde en la catedral y una ceremonia realizada junto a la estatua de la Libertad, en la plaza Independencia, donde un grupo de personas depositó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio.

Los derechos humanos

CARACAS, (EFE). -- La Conferencia Interparlamentaria Mundial continuó ayer sus deliberaciones con la discusión de un informe sobre la situación de los derechos humanos en América latina, particularmente en la Argentina, Chile y Uruguay.

El informe fue presentado por el delegado de Senegal I. Wane del Comité Especial de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), creado en el 124 período de sesiones celebrado en Praga en

abril. Integran el Comité Bélgica, Checoslovaquia, Costa Rica, México y Senegal.

El parlamentario estableció que en varios países de América latina no hay estado de derecho, a pesar de que algunos de ellos integran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Indicó que en esos países los regímenes son represivos y no se basan en los principios internacionales de los derechos humanos sino en la doctrina que se ha dado en llamar de la "Seguridad Nacional", la cual tiende a privilegiar el poder del Estado y la seguridad colectiva en detrimento de la persona y los valores inherentes a su dignidad.

◆ Córdoba

Al reintegrarse a sus funciones en Buenos Aires, después de haber viajado a Córdoba, el miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Tinoco Castro, manifestó que en aquella ciudad habían asistido a todos los lugares que quisieron concurrir y se entrevistaron con todas las personas que deseaban entrevistar.

Añadió que habían cumplido su cometido con amplitud y libertad. "Cumplimos hasta el último punto de la misión que nos habíamos propuesto", afirmó.

"QUIEREN USARNOS CON FINES PERNICIOSOS"

Dirigentes del Movimiento Industrial Argentino (MIA), asumiendo la representación de 184 asociaciones y cámaras empresarias, entrevistaron a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresándoles que la Argentina y su pueblo "han sufrido mucho como para no advertir en que momento se les dio la espalda y como se quiere usar nuestra tierra con fines perniciosos".

La expresión está contenida en una nota entregada por el MIA al presidente de la CIDH, Andrés Aguilar, y en la que manifiesta la extrañeza de los argentinos porque "cuando comenzamos a revivir de un triste período de ultraje a la persona humana, aparecen defensores internacionales de ciertos derechos humanos, presuntamente conculcados en nuestro país, que parecieran tener preeminencia absoluta sobre los derechos humanos de los argentinos, que habían sido ultrajados".

"La subversión que nos ensangrentó" declara el MIA -recorre hoy el mundo acusando a nuestro país, ocultando que fue la ejecutora de los hechos criminales que obligaron a la intervención de nuestras Fuerzas Armadas y que el luto y el dolor sólo fue padecido por las víctimas de las bandas por ellos formadas".

Dice también la nota que "deploramos profundamente las pérdidas de vidas, de cualquier sector beligerante que fuere, pero sostenemos que vulnera a la justicia el que se pretenda juzgar al que ha ejercido su legítima defensa y no al que desencadenó la guerra y asesinó incluso a niños para tratar de

lograr sus propósitos".

La nota de los empresarios puntualiza además que "mucho antes de marzo de 1976 ya habían sido mártires del extremismo muchos de nuestros directivos y funcionarios, vejados, raptados y asesinados por las bandas bárbaras desplegadas a lo largo y a lo ancho del país".

Después de señalar que también fueron víctimas de la subversión ciudadanos extranjeros sin que se supiera de reclamos "por los derechos mancillados de esos seres humanos", manifiesta el MIA que la acción subversiva actuó indiscriminadamente.

"La subversión terrorista -dice la nota- no discriminó en sus ataques destructivos, cayendo no sólo sobre los hombres de empresa, sino que en su afán de sembrar la anarquía necesaria para el logro de sus propósitos, asesinó a dirigentes obreros, a políticos, a religiosos y por cierto se ensañó en los miembros de las Fuerzas Armadas, incluso en jóvenes soldados conscriptos, como también en modestos policías y servidores del orden público".

Añade que "por eso, el 24 de marzo de 1976 fue saludado con alivio por toda la ciudadanía angustiada del país, que apoyó calurosamente la actuación de las Fuerzas Armadas, las que respondieron con la firmeza que era necesaria ante el caos y la barbarie".

"Gracias a ejercicio del derecho del poder para salvar la libertad y los derechos del pueblo argentino, hoy vivimos en un clima de paz, de seguridad y de trabajo en libertad, gozando la gente honesta de todos sus derechos individuales".

Expresiones sobre la visita de la CIDH

LA PRENSA 10-9-79

Movimiento Industrial

En una declaración el Movimiento Industrial Argentino expresa que "a los argentinos nos extraña y confunde que es precisamente entonces, cuando comenzamos a revivir de un triste período de ultraje a la persona humana, que aparecen defensores internacionales de ciertos derechos humanos, presuntamente conculcados en nuestro país, que parecieran tener preeminencia absoluta sobre los derechos humanos de los argentinos que habían sido ultrajados. Y más nos extraña que esos defensores se hagan eco de quienes, en su más formal cobardía, huyen de sus responsabilidades y se cobijan en el exterior desprestigiando y enlodando su propia cuna. Por último señala: deploramos profundamente las pérdidas de vidas de cualquier sector beligerante que fuere, pero sostenemos que vulnera a la justicia el que se pretenda juzgar al que ha ejercido su legítima defensa.

De la Cámara de Comercio

"No puede emitirse juicio alguno sobre los derechos humanos hoy en la Argentina, sin conocer y comprender lo sucedido en los años previos a la restauración peronista y especialmente, lo acontecido durante el lapso que va desde 1973 a 1976". Así se expresa una nota difundida por la Cámara Argentina de Comercio con relación a la visita que realiza el organismo de la OEA.

"En los años previos, a partir especialmente del secuestro y muerte del general Aramburu (uno de los principales protagonistas de la gesta que abatió al peronismo en 1955 y presidente del gobierno de la Revolución Libertadora) el creciente accionar del terrorismo subversivo alteró profundamente la vida argentina.

"Perón, desde el exterior, alentaba y financiaba a estas bandas armadas, que cobraron incontables víctimas de todos los sectores. Producida la toma del poder por el peronismo, la situación se

La Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, y el Movimiento Industrial Argentino, MIA, dirigieron sendas notas a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que se encuentra en el país invitada por el gobierno nacional. En ambos casos se hacen consideraciones sobre el terrorismo sufrido en un pasado inmediato y la situación actual.

La ADEBA expresa entre otros conceptos que "el proceso iniciado el 21 de marzo de 1976 debió enfrentar una guerra contra la subversión como condición necesaria e inevitable para la subsistencia de una sociedad civilizada, cuya victoria nos permite a los argentinos encontrarnos hoy en la reconstrucción material y moral de la República".

Agrega que "nuestra presencia ante la comisión que nos visita, al margen de su legitimidad o de su real contribución a un problema que debe ser resuelto por los argentinos en un acto de contribución a la paz de la República".

Las cámaras, federaciones y uniones agrupadas en el MIA, por su parte, manifiestan que "los industriales argentinos tenemos muy fresca en nuestras memorias la grave crisis moral en que había caído el país, que abrió la brecha para que se introdujera la violencia indiscriminada, posibilitando la invasión externa de la delincuencia subversiva, sustentada en filosofías extrañas a nuestra tradicional forma de vida, y encaminada a destruir mediante la acción criminal, nuestra condición de Nación. No olvidamos que la ausencia de autoridad y de gobierno había llegado a un punto crítico en el que quedó subrogado el estado de derecho".

Expresa luego que "la subversión terrorista no discriminó en sus ataques destructivos, cayendo no solo sobre los hombres de empresa, sino que en su afán de sembrar la anarquía necesaria para el logro de sus propósitos, asesinó a dirigentes obreros, a políticos, a religiosos y

por cierto se ensañó con los miembros de las Fuerzas Armadas, incluso jóvenes soldados conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, como también con modestos policías y servidores del orden público".

"Por eso —agrega el Movimiento Industrial Argentino— el 21 de marzo de 1976 fue saludado con alivio por toda la ciudadanía angustiada del país, que apoyó calurosamente la actuación de las Fuerzas Armadas, las que respondieron con la firmeza que era necesaria ante el caos y la barbarie".

También señala el MIA que "deploramos profundamente la pérdida de vidas, de cualquier sector beligerante que fuere, pero sostenemos que vulnera a la justicia el que se pretenda juzgar al que ha ejercido su legítima defensa y no al que desencadenó la guerra y asesinó incluso a niños para tratar de lograr sus propósitos".

◆ Cámara de Comercio

La Cámara Argentina de Comercio, en un comunicado de prensa dado a conocer, sostiene que "el país soportó tres años de vergüenza, de terrorismo, de corrupción, de obstrucción de la economía, de disolución en todos los órdenes. La resistencia de las reservas morales fue creciendo ante el desgobierno. Cabe señalar que en esta resistencia tuvo papel importante el empresariado, que agrupado en asamblea permanente, decretó un día de paro, lo cual constituyó un hecho insólito en el país".

"Hoy lo que más llama la atención —destaca por último— es que algunos de los principales responsables de crímenes horrendos (por acción, complicidad u omisión) hagan declaraciones en favor de los derechos humanos, que jamás respetaron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe saber a quiénes oye y preguntarles qué sucedía en el país, cuando ellos eran gobierno".

"En un momento insuperable del proceso de descomposición, las Fuerzas Armadas toman el poder en marzo de 1976 y llevan adelante una lucha frontal contra la subversión. Fue una guerra sucia, porque esa condición le imprimió el terrorismo. Los saldos de una guerra no son nunca agradables, aunque se gane. En la lucha y la legítima represión pueden cometerse excesos. Pero fue una lucha necesaria, porque literalmente, ya no se podía vivir en el país.

"Hoy, lo que más llama la atención, es que algunos de los principales responsables de crímenes horrendos (responsables por acción, complicidad u omisión) hagan declaraciones en favor de los derechos humanos, que jamás respetaron. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos debe saber a quiénes oye y preguntarles qué sucedía en el país cuando ellos eran gobierno. Es como si en Alemania los nazis se convirtieran ahora en abanderados de los derechos humanos y protestaran porque no les entregan el poder".

Los festejos populares. Actitud peronista que no sorprende. Reuniones en la Armada

Por Observador

La semana comenzó con el derribo de bombos y colocación de vallas en la plaza de Mayo. Fue el día lunes, cuando el equipo juvenil flamante campeón mundial de fútbol concurre a la Casa de Gobierno para recibir el saludo presidencial.

El día de la celebración la legítima alegría de quienes festejaron el triunfo deportivo, pareció rodeada por una atmósfera afeada por la aparente intención de explotar políticamente el acontecimiento.

Hubo, ese día lunes, muchos comentarios en la Casa de Gobierno. Abiertas o encubiertas críticas fueron detectadas en distintos sectores cercanos a la Presidencia y tal vez alguno de los tantos funcionarios que ocupan despachos en la Secretaría de Información Pública, habrá creído que alcanzaba un escalón más, en los esfuerzos

por lograr la simpatía presidencial.

Bandas militares fueron dispuestas también frente a la Casa de Gobierno, mostrándose de esta forma un dudoso gusto de los organizadores del festejo, en ese lugar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuó ese mismo día con sus entrevistas y hubo declaraciones de casi todos los interlocutores de ese organismo internacional.

Podemos asegurar que alguna de estas declaraciones, no tomaron de sorpresa al observador, aunque es evidente que sorprendieron al gobierno.

Declaración peronista

Tomemos a título de ejemplo, la declaración del vicepresidente del partido Justicialista, Deolindo Bittel y la de María Estela Martínez de Perón.

Las afirmaciones de Bittel causaron irritación en esferas castrenses y en las áreas de la Casa de Gobierno.

Esto llamó la atención, porque suponíamos que los "diálogos" canalizados en todos los comandos, con los representantes del peronismo político y sindical, constituirían los pasos de un franco acuerdo de ambas partes, para emprender la alegre marcha de desalojados y desalojados hacia la recomposición institucional del país.

Nadie, desde las esferas oficiales, había recordado hasta ahora la responsabilidad del peronismo en la larga etapa de decadencia que soportó la Nación.

Al decir que solamente los "corruptos" y los "subversivos" estarían ajenos a este curioso Proceso de Reorganización Nacional, se les brindó —generosamente— una tercera oportunidad de regeneración, pero, como alguien lo señaló muy bien, el peronismo es incorregible.

La primera vez, se dijo "ni vencedores ni vencidos"; después apareció el Gran Acuerdo Nacional del gobierno del general Lanusse, cuyos resultados son inolvidables y ahora se los quiso jerarquizar, ubicándolos en un plano distinto al de los corruptos y subversivos.

La opacidad de los "negociadores", que gastan faldones a la medida de los tiempos, dio ya el primer resultado en la actual gestión de gobierno y provocó la sana reacción registrada a través del comunicado oficial, dando respuesta al "agravio intolerable e irracional" del vicepresidente del partido Justicialista.

Peronistas en disidencia

Tras la declaración del partido Justicialista, hubo también otras declaraciones de militantes del mismo origen, que manifestaron su desacuerdo con Bittel, aunque —claro está— sin renunciar a su condición de peronistas.

Es difícil comprender o aceptar estas posiciones, pese a que llevan consigo un principio de autocritica, que con el tiempo puede desembocar en una actitud positiva para la libre actividad política.

Algo que puede servir de

ayuda a estos indecisos, es el recordar lo que dijo el creador del justicialismo el jueves 25 de mayo de 1974, en la residencia de Olivos, a las juventudes peronistas que allí se reunieron para saludarlo.

En respuesta a una queja relacionada con las torturas sufridas por dos "montoneros", Perón respondió así: "Los que hemos sido delinquentes, sabemos que muchas veces se las infla para llamar la atención..."

Esta afirmación, está registrada en publicaciones de la época y jamás fue desmentida.

Reuniones en la Armada

Los comandos superiores de la Armada, reunidos en dos oportunidades durante la semana que finaliza, evaluaron el tema de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también la declaración que hoy comentamos.

El almirante Lambruschini, decidió convocar al Consejo de Almirantes, organismo máximo de la institución naval, que está integrado por todos los contralmirantes y vicealmirantes en actividad.

Este organismo es convocado en aquellos casos en que los temas a considerar son de una especial atención de la fuerza.

El jueves último, se informó con el habitual laconismo, que se había considerado la marcha del Proceso, el Plan Político y las declaraciones emitidas en los últimos días, vinculadas con la visita de la CIDH.

No sería excesivamente descortado, suponer que la institución naval dio comienzo a un replanteo total respecto a los resultados políticos observados a esta altura del Proceso de Reorganización Nacional.

El tiempo dirá, a través de las futuras declaraciones del comandante en jefe de la Armada, si esto es así y si en algunos aspectos específicos del Plan Político en elaboración, por ejemplo en la instrumentación, modifica algunos criterios que estaban en vías de aprobación.

Cabe señalar también, respecto al instrumento que las Fuerzas Armadas darán a co-

Los festejos populares

La Prensa 16-9-79

nocer antes de fin de año, que si bien estará compuesto por las cuatro partes que consignamos en nuestra entrega del domingo último, declaración de principios, ideario, bases e instrumentación, todavía nadie está seguro respecto a si este año, se conocerá totalmente.

La impresión recogida esta semana, indica que no será así, pero que "algo se dirá".

Asociaciones
profesionales

Como se sabe, el presidente emprenderá en la segunda semana de octubre un viaje con destino a Japón.

Antes de su partida, Videla dispondrá, según versiones que pudimos recoger en el fin de semana, la sanción y promulgación de la nueva ley de asociaciones gremiales de trabajadores.

La reglamentación del nuevo instrumento legal, según se ha comentado en diversas fuentes, recién podría conocerse en los primeros meses del año próximo.

Respecto del viaje a Japón, también pudo saberse que en esta visita, la mayor parte de los acuerdos preparados son de índole económica, afirmandose en algunos círculos que serían el 90 por ciento de los temas a considerar en Tokio por las autoridades argentinas y las japonesas.

Quizá en el curso de la semana que comienza, puedan obtenerse mayores detalles de estos acuerdos.

Visita llamativa

Pocas veces se conocen las visitas que la viuda de Perón tiene en su residencia privada de San Vicente.

Esta semana, tomó estado público por las vías naturales la visita que le efectuaron miembros de la CIDH, así como también la declaración que a su término, la ex presidenta hizo conocer a los medios de difusión.

Lo que no se sabía, era que la privilegiada señora, había recibido la semana anterior al embajador de Panamá acreditado ante el gobierno argentino, señor Hugo Torrijos.

El embajador Torrijos, es el hermano del jefe de la

Guardia Nacional de Panamá, general Omar Torrijos, quien actualmente es el jefe de las fuerzas armadas de su país, no así jefe de estado, tras la reforma constitucional registrada en su país.

El general Omar Torrijos, tiene previsto visitar la Argentina, en la segunda quincena del próximo mes de octubre, cuando Videla ya esté de regreso del Japón.

Curioso fin de semana

El último día hábil de la semana, el viernes, el centro de la ciudad de Buenos Aires se vio conmovido por una serie de explosiones. El tránsito sufrió embotellamientos, debido al cierre de la circulación de vehículos por la zona de Plaza de Mayo y las personas que no se encontraban cerca de ese paseo, tejieron conjeturas ajenas a la realidad.

Todo el alboroto se originó en una presentación que efectuaron parientes de desaparecidos ante el Ministerio del Interior, eligiendo un día en que los miembros de la C.I.D.H. habían viajado al interior del país.

El hecho hubiera pasado quizás inadvertido, salvo la natural curiosidad que puede despertar una reducida manifestación de personas en la Plaza de Mayo, si las bombas en cuestión no hubieran estallado, arrojando al aire volantes con impresos.

Hubo despliegue policial, sin molestar a los manifestantes, cierre de calles y ulular de sirenas por doquier.

Tras la salida de la delegación del Ministerio del Interior, todo volvió a la normalidad sin ningún otro acontecer.

Fue, como decimos, un curioso fin de semana.

Equívocos lamentables

La crónica periodística de los últimos meses, registra la frecuente presencia entre nosotros de delegaciones de dirigentes políticos extranjeros que nos visitan para analizar la situación político-social del país. Pero lo que más llama la atención, es que casi siempre estos visitantes —que pertenecen a partidos democráticos— se vinculan aquí

con las personas menos indicadas para los fines que persiguen. La visión que se llevan es entonces parcial y deformada.

Días pasados ocurrió al respecto algo sorprendente. Dos jóvenes y destacados políticos españoles, la licenciada Guadalupe Ruiz Jiménez de Arias Salgado y el doctor Miguel Sánchez Montes de Oca, ambos pertenecientes a la Unión del Centro Democrático —es decir el partido político gobernante— visitaron nuestro país con el propósito, públicamente confesado, de invitar a personalidades argentinas a ingresar a una "Internacional de Centro" próxima a crearse. Pero lo paradójico es que sacando las frías visitas protocolares —ministerios del Interior y de Justicia, Secretaría General de la Presidencia de la Nación, etcétera— los contactos con los dirigentes locales, prácticamente sin excepción, fueron con los responsables directos, o los cómplices, de la catástrofe vivida hasta el 24 de marzo de 1976. En efecto, se entrevistaron con los más diversos grupos y subgrupos en que hoy aparece fracturado el peronismo

tanto político como sindical, conversaron largamente con representantes del PI que orienta el doctor Oscar Alende —los mismos que en las últimas elecciones vertebraron un frente de extrema izquierda que posibilitó el acceso de los comunistas al Parlamento—, también visitaron al jefe del radicalismo, doctor Ricardo Balbín, y finalmente, departieron con el doctor Arturo Frondizi.

Una pregunta elemental surge entonces con facilidad: ¿qué tienen de común los entrevistados con el programa liberal y centrista del partido que encara la difícil reconstrucción democrática española? Por eso, la excepción fue la conversación mantenida con miembros de la Unión Cristiana Democrática, agrupación que sin duda está más cercana a las líneas ideológicas del partido del premier Adolfo Suárez.

Por todo ello, sería pues constructivo que los futuros viajeros seleccionen los interlocutores con mayor cuidado —las embajadas acreditadas en nuestro país podrían contribuir a esto— para evitar así tan lamentables equívocos.

Fundado por José C. Paz
el 18 de octubre de
1869. — Director desde
1898 a 1943, Ezequiel P.
Paz; desde 1943 a 1977,
Alberto Gainza Paz



LA PRENSA

DIARIO DE LA MAÑANA

Clausurada y confiscada por defender la libertad el 26 de
enero de 1951; reinició sus ediciones el 3 de febrero de 1956

Director
MAXIMO GAINZA

Domingo 16 de septiembre de 1979

Con ira y con odio

La presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país ha dado motivo a representantes de partidos políticos y de otras entidades para analizar la situación general y emitir juicios sobre el Proceso de Reorganización Nacional y las causas que le dieron origen. De esas declaraciones no pueden dejar de considerarse, por la falsedad e injusticia de sus conclusiones, las que emanaron del vicepresidente en ejercicio del partido Justicialista y de la viuda de Perón, actualmente sometida a proceso por delitos comunes ante la justicia federal.

Después de invocarse en ellas una actual y supuesta mayoría electoral, que en su momento fue producto de una concertada e ilimitada demagogia y la más extraordinaria corrupción observada en el mundo contemporáneo, se acusa al gobierno de favorecer a sectores privilegiados, se afirma que él procura implantar un "terrorismo de Estado", se le imputa la permanente violación de los derechos humanos y se cita hipócritamente una frase en que Perón exaltó el valor de la legalidad, la misma que él había escarnecido en el ejercicio del poder. En términos análogos se expide la ex presidente de la Nación, en el estilo desaprensivo y tortuoso aprendido del gran responsable de la frustración del país.

Se explica, por lo tanto, la reacción del gobierno en el comunicado difundido por la Secretaría de Información Pública, cuyas apreciaciones respecto del régimen depuesto no pueden sino compartirse plenamente, aunque de nuevo llama la atención la sugerente omisión en la que se incurre al no mencionarse a Perón como inspirador, ejecutor y culpable de la desastrosa situación en que se hallaba el país en marzo de 1976. En el comunicado oficial se expresa con verdad que "los artífices del caos aconsejan ahora ordenamiento jurídico, olvidando que negaron hasta la justicia a sus enemigos" y que ellos "alentaron, cobijaron y aplaudieron a sus 'formaciones especiales' y abrieron las puertas de las cárceles a los delincuentes y terroristas". Sin embargo, no se aclara en él, como hubiera correspondido y hay que recordar, que fue Perón el autor y responsable de todo lo que sucedió entonces. Fue Perón, en efecto, el que en un memorándum reservado, extendido de su puño y letra, dirigido a su ministro Subiza, hallado entre sus papeles, con triple subrayado, lo instruyó en el sentido de que "¡al enemigo, ni justicia!" Fue Perón el que desde Madrid, en una estremecedora carta que dirigiera a los terroristas, los felicitó por haber asesinado al general Aramburu. Fue Perón, el mismo día en que sus secuaces proclamaban que "Cámpora llegó al gobierno y Perón al poder", el que inspiró al Congreso la ley de amnistía que abrió las puertas de las cárceles a los autores de la más horrible y sucia violencia que el país debió soportar nunca, agravándose así la pesadilla de la que sólo ahora los argentinos empezamos a salir. Fue Perón el que, el 11 de junio de 1955, dio la orden de

que se quemara la bandera nacional para atribuir a los fieles católicos un crimen abominable que sirviera para justificar una represión despiadada. Y fue la viuda de Perón, que ahora lo invoca y se solidariza con todo lo que éste hizo desde el poder, la que amenazó con convertirse en "la mujer del látigo".

Esta es una excelente oportunidad para ilustrar a la opinión pública, una vez más, sobre la verdadera personalidad de Perón, sus principios y sus sentimientos. Para ello basta recordar que él dijo: "El día que se lancen a colgar, yo estaré al lado de los que cuelgan"; "entregaré unos metros de piola a cada descamisado y veremos quién cuelga a quién"; "con un fusil o con un cuchillo, a matar al que se encuentre"; "levantaremos horcas en todo el país para colgar a los opositores"; "vamos a salir a la calle, de una sola vez, para que no vuelvan más ni los hijos de ellos"; "distribuiremos alambre de enfardar para colgar a nuestros enemigos"; "leña, leña, eso de la leña que ustedes aconsejan ¿por qué no empiezan ustedes a darla?"; "aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades puede ser muerto por cualquier argentino"; "y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos"; "¡ah! si yo hubiera previsto lo que iba a pasar, entonces sí: hubiera fusilado al medio millón, o un millón si era necesario. Tal vez ahora eso se produzca".

El 26 de marzo de 1976 dijimos que había "caído un gobierno, pues las instituciones, en realidad, habían caído en 1973"; y sostuvimos que "no podía dejar de señalarse a los que, por interés o ceguera, llevaron su pasividad y tolerancia, en el Congreso y los partidos políticos, a extremos que la historia juzgará". Asimismo afirmamos que "tampoco pueden dejar de adjudicarse las responsabilidades de quienes, en la llamada 'Hora del Pueblo', consintieron que las expresiones más humillantes del servilismo y la irracionalidad fueran las bases del restablecimiento de las instituciones, y que aún disimularon el escándalo nunca visto de que se compartiera el Poder Ejecutivo como se compartía la unión matrimonial, rodeándolo de servidores íntimos que luego fueron ministros prófugos". Todo esto lo dijimos sin ánimo de venganza y reclamando solamente justicia, para volver a levantar sobre las ruinas, en el menor tiempo posible, una democracia auténtica. Lo dijimos "sin ira y sin odio, pero sin olvidar el pasado inmediato, cuya tremenda y desoladora lección debe incorporarse a la historia para que las generaciones sucesivas se mantengan alertas".

El gobierno habrá advertido ahora cuál es la entrañable inmortalidad, permanente e inconfundible, del peronismo, hechura, heredero y continuador de Perón. Esta deleznable personalidad política y la mala calidad humana del peronismo acaban de tener plena confirmación en las declaraciones que comentamos, hechas, como no podía ser de otro modo, con ira y con odio.

La CIDH dialogará con C mpora antes de partir

El ex presidente H ctor Jos  C mpora ser  entrevistado por la Comisi n Interamericana de Derechos Humanos antes de que  sta d  por finalizada su labor en el pa s.

Los miembros de la entidad de la OEA tambi n conversar n con los otros dos asilados argentinos en la embajada de M xico, en Buenos Aires, H ctor C mpora (h) y Juan Manuel Abal Medina, seg n acordaron en las primeras horas de ayer representantes de la CIDH y el embajador de aquel pa s, Jos  Antonio Jara Villareal.

La informaci n fue suministrada en la víspera por el vocero de la Comisi n, Edmundo Vargas Carre o, en rueda de prensa, quien dijo adem s que el gobierno mexicano ha solicitado por nota al argentino un salvoconducto para que los tres asilados puedan abandonar el pa s, pero que a n no ha recibido respuesta sobre el tema.

Tanto C mpora como su hijo y Abal Medina se encuentran alojados en el edificio de la embajada del pa s azteca, en el barrio de Belgrano, desde el 24 de marzo de 1976.

Vargas Carre o indic , sobre la eventual salida del pa s del ex presidente, que "de acuerdo con las convenciones aplicables a la materia del Derecho Internacional americano, la instituci n del derecho de asilo funciona sobre la base de dos elementos: 1-- la naturaleza del delito es determinada por el Estado asilante, es decir, en tanto el asilo no puede concederse nunca a un delincuente com n, el embajador de M xico ha informado a la CIDH que su gobierno considera a los tres asilados como personas que merecen aquella facilidad; y 2-- de acuerdo con las normas que surgen de las convenciones y del derecho internacional americano, el corolario de esta calificaci n consiste en que el gobierno territorial --en este caso la Argentina-- debe conceder el salvoconducto".

Aclar  a continuaci n que, con lo antedicho, "la Comisi n no est  emitiendo ning n juicio de valor, sino simplemente transmitiendo una informaci n para lo cual ha sido autorizada por el embajador Jara Villareal".

Al comienzo de su reuni n con los periodistas, el secretario general de la CIDH hab a desmentido la informaci n publicada por un matutino porte o --que no es Clar n-- en el sentido de que  l y el titular de la Comisi n, Andr s Aguillar, hab an mantenido una entrevista con C mpora el viernes  ltimo, en la sede mexicana en esta capital.

HABLARA CON CÁMPORA LA CIDH

Será entre mañana y el miércoles.

Concluyó la etapa informativa

Entre mañana y el miércoles los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entrevistarán con el ex presidente Héctor J. Cámpora, actualmente asilado en la embajada de México en Buenos Aires. — El secretario de la delegación extranjera, Edmundo Vargas Carreño, admitió que se busca lograr un salvoconducto para que Cámpora abandone el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), concluyó ayer su "etapa informativa", tras nueve días de comprobaciones sobre la realidad nacional y luego de clasificar y procesar durante el fin de semana los antecedentes registrados, iniciará el lunes una serie de verificaciones con las autoridades gubernamentales, en la última etapa de su permanencia en el país.

La comisión tenía previsto extender hasta hoy en la tarde el plazo de recepción de denuncias e informes, y atender pedidos de última hora formulados por familiares de presuntos desaparecidos.

Sin embargo, como ayer a la tarde ya no quedaban más presentaciones, se decidió cerrar el registro sin perjuicio de considerar particularmente algún pedido adicional que se registrase entre ayer en la noche y hoy, según informó un secretario de la comisión.

Ayer los miembros de la comisión recibieron en audiencias colectivas a representantes de entidades empresarias argentinas, los cuales, en distintos pronunciamientos escritos, expresaron su deseo de que la comisión observe objetivamente la realidad nacional y reseñaron los ataques y perjuicios que sufrieron muchos de sus integrantes y sus empresas durante la acción de la guerrilla y el terrorismo en el país.

También los miembros de la comisión conversaron con representantes de nucleamientos políticos menores quienes por su parte hicieron llegar sus inquietudes.

En su habitual conferencia de prensa, ofrecida a mediodía, el secretario ejecutivo de la comisión, Edmundo Vargas Carreño, negó la versión de un matutino según la cual los miembros del organismo se habían entrevistado ayer con el ex presidente Héctor Cámpora asilado en la embajada de México.

HUBO CONTACTOS

Señaló que lo único que hubo fueron contactos preliminares con el embajador de México, José Antonio Lara Villarreal, pero anticipó que la entrevista finalmente se concretará entre mañana y el miércoles de la semana próxima.

Ante la pregunta de un periodista si el propósito de la comisión de entrevistar a Cámpora estaba relacionado con las tramitaciones para que éste pudiera obtener un salvoconducto y abandonar el país, Vargas Carreño señaló que "indirectamente sí".

"El señor embajador nos ha pedido que transmitamos a ustedes su impresión en el sentido de que el gobierno de México, considera al doctor Cámpora como un refugiado político al cual a juicio del gobierno de México, el gobierno argentino debe concederle a él y a sus acompañantes el salvoconducto para que abandone el país, agregó, repito, este no es un juicio de valores de la comisión, sino una transmisión literal a la prensa de lo que nos ha pedido el embajador de México, le manifestamos a ustedes".

Vargas dijo también que no podía emitir opinión sobre los sucesos ocurridos el viernes, en plaza de Mayo donde estallaron seis petardos lanzapantefos en momentos en que delegados de 300 familiares de presuntos desaparecidos presentaban un memorial en la Casa de Gobierno.

Ante una pregunta de un corresponsal extranjero respecto cual era su opinión en torno a una posible acción judicial contra el presidente en ejercicio del Partido Justicialista, Deolindo Bittel, por el contenido de la publicitada declaración que ese partido entregó a la comisión, y teniendo en cuenta una declaración de la misma en el sentido de que no se adoptarían represalias contra quienes presentaran testimonios expresó:

"Quiero dividir la respuesta en dos partes. La primera, desconozco los alcances del problema judicial planteado en torno al señor Bittel y entiendo que su dilucidación es de resorte exclusivo de la justicia argentina. La segunda, es que el gobierno argentino nos ha garantizado que no adoptará represalias contra las personas que acudan a entregar sus informes o denuncias o po-

nerse en contacto con los miembros de la comisión".

Vargas Carreño desmintió finalmente "en forma terminante" declaraciones atribuidas a uno de los miembros administrativos de la comisión, Jorge Lauton, a quien días atrás un periódico le atribuyó haber dicho que en la Argentina "hay campos de concentración".

"Esa afirmación jamás partió de ningún miembro de la comisión, que por la naturaleza de su función no puede abrir juicios de valor sobre su misión, ni tampoco de ninguno de los integrantes de su cuerpo administrativo, por lo que es falsa", dijo el secretario ejecutivo de la CIDH.

En tanto ayer volvió a repetirse un nuevo incidente cuando un fotógrafo no identificado intentó fotografiar los rostros de los periodistas y fotógrafos que se hallaban a la puerta de la sede de la comisión, en el edificio de la OEA, en esta capital, al tiempo que tomaba primeros planos de las personas que aguardaban para ser atendidas.

Los reporteros alertaron a policías de guardia en el lugar, quienes retiraron al intruso y le ordenaron retirarse.

Vargas Carreño dijo que hoy no se cumplirán actividades públicas y que eventualmente serán atendidas audiencias o encuentros privados.

Mañana a las 10.30, la comisión se entrevistará con el jefe de la Policía Federal, general Juan Bautista Sasiain y por la tarde hará la propio con el director del Servicio Penitenciario Federal.

JUVENTUDES

Dirigentes de distintas corrientes políticas e integrantes de la Asamblea

Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), y del Movimiento Ecuaménico por los Derechos Humanos (MEDH) pusieron en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento, cuyo texto fue entregado posteriormente al periodismo.

El documento indica entre otras cosas, que "la juventud argentina repudia todos aquellos actos que atenten contra la vida, la seguridad y la libertad de las personas, y siente una particular repulsión por el crimen".

La declaración incluye nóminas de personas desaparecidas, así como los distintos porcentajes de jóvenes (estudiantes y obreros) incluidos en ellas.

Sostiene la presentación hecha ante la CIDH, que "la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuaménico por los Derechos Humanos, tienen registradas 5.470 casos de denuncias de desapariciones, hasta el mes de junio de 1979".

A renglón seguido, afirman los dirigentes juveniles que "de dicha cantidad se tiene registrada la edad de 3.480 casos, de los cuales 2.585 casos corresponden a víctimas menores de 30 años".

Sigue =

DIARIO POPULAR
16-9-79

(2)

tuados ante las denuncias recibidas, las modalidades y consecuencia de las detenciones y ~~conclus~~ con la inserción del "proyecto de conclusiones de la segunda sesión del seminario "la Juventud, los derechos humanos y su futuro en la vida nacional", efectuado recientemente.

La presentación a la CIDH está firmada por 43 dirigentes de distintas organizaciones, entre las cuales figuran, además de la APDH, MEDH, y LADH, los Partidos Justicialista, Radical, Intransigente, Socialista Unificado, Socialista Popular, Comunista y Federación Universitaria de Buenos Aires.

También firman el documento dirigentes juveniles católicos y del servicio "Paz y Justicia" así como seminaristas del Rabinato Latinoamericano y de la Iglesia Metodista.

150 DENUNCIAS

SAN MIGUEL DE TUCUMAN. — No menos de 150 denuncias de personas presuntamente desaparecidas recibieron ayer los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentran cumpliendo trámites en un hotel céntrico de esta capital.

Miembros de la CIDH, llegaron el viernes aquí encabezados por Velazco Clark y hoy se completó la delegación de ese organismo con el arribo, procedentes de Córdoba, del Dr. Roberto Noris y la señora Yoli de Toro.

Poco antes de la llegada de estos últimos, Clark informó al periodismo que habían sido atendidas 150 personas que esperaban recibir otras 70 antes de concluir hoy sus labores.

"De lo que se deduce —acota— que existe una elevada proporción de jóvenes desaparecidos, más precisamente el 75 % de los casos registrados con conocimiento de la edad, siendo que seguramente esa misma proporción se da en los 1.990 restantes".

La declaración alude también a los trámites efec-

6

Entregan a la CIDH un documento

Dirigentes de distintas corrientes políticas e integrantes de la **Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.)**, la **Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)** y del **Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)**, pusieron ayer en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento, cuyo texto fue entregado posteriormente al periodismo.

El documento indica, entre otras cosas, que "la juventud argentina repudia todos aquellos actos que atentan contra la vida, la seguridad y la libertad de las personas, y siente una particular repulsión por el crimen".

La declaración incluye nóminas de personas desaparecidas, así como los distintos porcentajes de jóvenes (estudiantes y obreros) incluidos en ellas.

Sostiene la presentación hecha ante la

CIDH que "la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, tienen registrados 5.470 casos de denuncias de desapariciones hasta el mes de junio de 1979".

A renglón seguido afirman los dirigentes juveniles que "de dicha cantidad se tiene registrada la edad de 3.480 casos, de los cuales 2.585 casos corresponden a víctimas menores de 30 años".

"De lo que se deduce -acota- que existe una elevada proporción de jóvenes desaparecidos, más precisamente el 75 por ciento de los casos registrados con conocimiento de la edad, siendo que seguramente esa misma proporción se da en los 1.990 restantes".

La declaración alude también a los trámites efectuados ante las denuncias recibidas.

Posición empresaria

También la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel se ha dirigido a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que nos visita, para agradecerle la audiencia concedida días atrás y exponer su opinión sobre la actualidad argentina.

Dice la entidad que "superados los aciagos momentos de intimidaciones, atropellos, crímenes y atentados, que también padecieron integrantes de nuestro sector, el país puede mostrarse abierto al mundo para que se lo juzgue tal cual es, recorriendo, no sin sacrificios, el camino definitivo hacia la paz, el orden y el trabajo fecundo que nos permitirá recuperar el lugar de privilegio que otrora ocupáramos entre las naciones".

Agrega luego que "a quienes hoy pretenden erigirse en paladines de derechos y libertades que ayer desconocieron y escafecieron con esa misma responsabilidad, porque si bien podemos perdonar no olvidamos, y porque se hallan moral-

mente descalificados para manifestarse como lo hacen, los señalamos como responsables del intento de desintegración del país". Firman Héctor Gronchi y Juan Salaber, presidente y prosecretario.

6

La Comisión de la OEA inicia una nueva etapa

Tendrá contactos oficiales y se entrevistará con Cámpora

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cumple su décimo día de estado en nuestro país, concluyó ayer la primera etapa de su programa previsto que comprendió entre otras, visitas a unidades carcelarias de esta capital y del interior del país, entrevistas con dirigentes políticos, sindicales y empresarios y la recepción de denuncias acerca de desapariciones que formularon sus familiares. Sin embargo, no se descartó la posibilidad de que hoy, se reciban también hasta mediodía, las presentadas por las personas que aún desean realizar la gestión.

Asimismo, el secretario ejecutivo de la CIDH, doctor Edmundo Vargas Carreño confirmó que en fecha aún a determinarse, los miembros del organismo concurrirán a la embajada de México para mantener una entrevista con el ex presidente Cámpora y los otros dos asilados argentinos en aquella representación diplomática.

Por otra parte, anunció que tras el descanso previsto para hoy, —que algunos miembros aprovecharán para proseguir con las reuniones privadas destinadas a evaluar los resultados obtenidos por la CIDH hasta el momento de su misión en nuestro país—, los miembros de la entidad comenzarán mañana las entrevistas con autoridades y organismos oficiales. La agenda comprende para el lunes visitas a dependencias de la Policía Federal y Servicio Penitenciario.

En las oficinas de la OEA

A partir de las 10.30 comenzaron a llegar al asiento de la CIDH, en el edificio de la OEA, los miembros de la comisión quienes de inmediato recibieron a distintas delegaciones empresariales, cuyos integrantes posteriormente dieron declaraciones donde fijan su posición sobre la visita.

Concurrieron entre otras, ya que no se suministró oficialmente la lista de audien-

cias previstas, representantes de la Asociación Fabricantes de Celulosa y Papel; Cámara Argent. de Comercio, Círculo de Ingenieros, Comisión de Familiares de Abogados Desaparecidos, Coordinadora de Cámaras de la Industria de Productos Alimenticios, Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, Federación Universitaria Tecnológica y miembros de la Juventud de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Un fotógrafo

Nuevamente se registró ayer por la mañana un incidente frente al local de la OEA, donde los periodistas y fotógrafos cumplen su tarea en la calle. Al ser individualizado un supuesto fotógrafo profesional que registraba sus notas entre los periodistas, obteniendo placas de las personas que integraban las distintas delegaciones que concurrían a conversar con la CIDH, fue invitado por sus colegas a identificar al medio que representaba, cosa que no pudo hacer con precisión, ya que alegó carecer de credencial.

Los fotógrafos entonces llamaron a dos agentes de la Policía Federal que cumplen misión de custodia en el lugar para que procediera a su identificación. El supuesto profesional se retiró a una distancia junto con los policías y extrajo de entre sus ropas una credencial que mostró a la autoridad.

Sin embargo los policías lo invitaron a que se retirara, finalizando así el incidente.

Reunión informativa

A las 12.30 llegó el secretario ejecutivo de la comisión, doctor Edmundo Vargas Carreño quien de inmediato invitó a los periodistas, previa identificación de cada uno, a ingresar para conversar.

A esa hora ya habían sido atendidas todas las personas

que concurren a presentar solicitudes.

El doctor Vargas Carreño, que durante la mañana mantuvo reuniones sobre las cuales se excusó de informar, comenzó por señalar que finalizada la etapa de recepción de solicitudes, se procederá a su clasificación durante el fin de semana y agregó que mañana iniciará una serie de comprobaciones y verificaciones con autoridades gubernamentales.

Reunión con Cámpora

Ante una consulta negó que la entidad hubiera entrevista a Héctor Cámpora y afirmó que hubo encuentros con el embajador de México en nuestro país para concretarla en los próximos días.

Sobre el particular dijo "que no existe ningún impedimento para ello", e interrogado sobre si la visita a Cámpora estaría relacionada con la posibilidad de que el ex presidente abandone próximamente el país, el doctor Vargas Carreño expresó:

"Indirectamente puedo decir que sí. El señor embajador nos ha pedido que traslademos a ustedes su impresión en el sentido de que el gobierno de México considere al doctor Cámpora, y a otros dos asilados (refiriéndose a uno de los hijos del doctor Cámpora y a Abal Medina), como refugiados políticos, por lo cual a juicio del gobierno de México, las autoridades argentinas deben concederles el salvoconducto para que abandonen el país".

Sobre el particular, Vargas Carreño subrayó que "éste no es un juicio de valores de la comisión, sino una transmisión literal a la prensa de lo que nos ha pedido el embajador mexicano les manifestáramos a ustedes".

Los hechos en la Plaza de Mayo

Más adelante y respondiendo a otra pregunta, dijo que no podía emitir opinión sobre la serie de explosiones ocurridas el viernes último en la plaza de Mayo, limitándose a señalar que sólo había leído en los diarios los detalles del hecho.

Situación de Bittel

Finalmente, y al contestar a un corresponsal extranjero, quien le requirió su opinión sobre una posible acción judicial contra el presidente del partido Justicialista, Deolindo Bittel, por el contenido de su declaración entregada a la CIDH, el doctor Vargas Carreño puntualizó:

"Quiero dividir la respuesta en dos partes. La primera, desconozco los alcances del problema judicial planteado en torno al señor Bittel y entiendo que su dilucidación es de resorte exclusivo de la justicia argentina; la segunda, —agregó—, es que el gobierno nacional nos ha garantizado que no adoptará repre-

salias contra las personas que acudan a entregar sus denuncias o testimonios a la comisión".

Recibieronse 150 denuncias en Tucumán

Tucumán (NA) — Menos de 150 denuncias de personas presuntamente desaparecidas recibieron ayer miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra cumpliendo trámites desde la víspera en un hotel céntrico de esta capital.

Miembros de la CIDH llegaron anteayer aquí encabezados por Velasco Clark y ayer se completó la delegación de ese organismo con el arribo, procedentes de Córdoba, del doctor Roberto Noris y la señora Yoli de Toro.

Poco antes de la llegada de estos últimos, Clark informó al periodismo que habían sido atendidas 150 personas y que esperaban recibir otras 70 antes de concluir sus labores.

Siguieron con su labor los miembros de la Comisión de Derechos Humanos

LA OPINION 16-9-79

Según se informó ayer por la tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había concluido en esa jornada la recepción de informes y denuncias por parte de familiares de presuntos desaparecidos y, tras procesar y clasificar esos datos durante el fin de semana, iniciará mañana una serie de comprobaciones con las autoridades.

Junto con esa realidad, esbozada por el secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Vargas Carreño, el tema que más expectativa provocó en el ámbito informativo, fue la entrevista que los principales representantes de la CIDH mantendrían, entre hoy y el martes próximo, con el ex presidente Héctor J. Cámpora, uno de sus hijos y Juan Manuel Abal Medina, en la embajada de México, donde están asilados desde marzo de 1976.

Al respecto, el presidente de la CIDH, Andrés Aguilar, negó ayer que la entrevista se hubiera realizado ya, con las siguientes frases: "Es probable —dijo— que veamos al doctor Cámpora en la semana próxima, antes del miércoles. Por ahora sólo hemos mantenido algunas reuniones con el embajador, José Antonio Jara Villarreal, para interiorizarnos de la situación de los asilados y concretar la entrevista".

Ante una pregunta en el sentido de que la visita a Cámpora estaría relacionada con la posibilidad de que el ex presidente abandone próximamente el país, el señor Vargas Carreño respondió: "Indirectamente, puedo decir que sí. El señor embajador nos ha pedido que

transmitamos a ustedes —los periodistas— su impresión con respecto a cómo considera el gobierno de México al doctor Cámpora. Es un refugiado político y a juicio del gobierno mexicano, el gobierno argentino debería concederle el salvoconducto para que abandone el país".

En la reunión de prensa, el secretario ejecutivo de la CIDH también respondió, indirectamente, una pregunta de un corresponsal extranjero, referida a una posible acción judicial contra el presidente en ejercicio del Partido Justicialista, Deolindo Bittel. Lo hizo así: "Quiero dividir la respuesta en dos partes. La primera, es que desconozco los alcances del problema judicial planteado en torno al señor Bittel, y entiendo que su dilucidación es de resorte exclusivo de la Justicia argentina. La segunda, es que el gobierno argentino nos ha garantizado que no adoptará represalias contra las personas que acudan a entregar sus denuncias o testimonios a la Comisión".

El último punto candente que debió oprimir al señor Vargas Carreño fue la versión de una más que cáustica frase que se atribuyó al señor Jorge Lawton, en el día de ayer. Al respecto, el secretario ejecutivo de la CIDH dijo: "Quiero hacer un desmentido categórico a lo que se dijo del señor Lawton. El no es un funcionario permanente de esta Comisión, sólo es un intérprete, por lo tanto no tiene atribuciones para declarar nada. Y más, él no dijo eso que se le atribuyó. Es absolutamente falsa la versión".

Como se recordará, el mencionado señor Lawton viajó el domingo pasado hacia Resistencia, en compañía de los señores Francisco Bertrand Galindo y Thomas Farer. En la ocasión, según se publicara recientemente, al ceder un cronista un lugar en el avión para que los miembros de la CIDH viajara junto al intérprete, éste habría expresado: "Me cede el lugar para tomar el avión o para ir al campo de concentración?". Lo que habría provocado la pregunta del cronista: "¿Dónde están ubicados esos campos de concentración que dice?", que no recibió respuesta.

Al margen de ese contexto trascendieron también ayer, los conceptos más tajante que vertió el ex ministro Francisco Manrique sobre la CIDH, tanto verbalmente como en el documento que entregó a sus miembros cuando lo visitaron. Ese documento contiene lo siguiente: "La Argentina no acepta estar sentada en ningún banquillo de acusado... No resulta agradable a los argentinos la presencia en el país de una comisión investigadora sobre derechos humanos, aun cuando su estada entre nosotros se origine en una invitación del propio gobierno. Los argentinos queremos ser nosotros mismos los que abortemos soluciones a nuestras cosas, y sería nuestra preferencia que todo correctivo que fuera menester surgiese de nosotros mismos, sin que organismos interamericanos vengán a señalarnos defectos o indicarnos pautas de conducta".

LO PRENSA 19-9-79

CRÓNICA
16-9-79

Asociación de Bancos Argentinos

Una delegación de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA; encabezada por su presidente, doctor Narciso E. Ocampo se entrevistó con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., que visita el país para fijar su posición frente al terrorismo.

En la oportunidad, los representantes de la banca nacional entregaron a los visitantes una declaración cuyo texto expresa, entre otros conceptos, lo siguiente: "La Argentina, con la voluntad y el sacrificio de todos sus habitantes, trabaja hoy para la reconstrucción moral y material de una sociedad que ha padecido la más grave de las agresiones: la del terrorismo; esta agresión, alentada, justificada y respaldada por grupos ideológicos de claro signo totalitario y extranjero, contaminó el pensamiento de argentinos que así se transformaron en ejecutores de los más horribles crímenes contra la comunidad.

"El proceso iniciado el 24 de marzo de 1978 debió enfrentar una guerra contra la subversión como condición necesaria e inevitable para la subsistencia de una sociedad civilizada cuya victoria nos permite a los argentinos encontrarnos hoy en la reconstrucción material y moral de la República.

"Esperamos que la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos invitada por el gobierno nacional, sea un medio de esclarecimiento para la opinión internacional de la

verdadera realidad argentina, gravemente distorsionada por elementos del terrorismo".

Celulosa y Papel

La Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, después de su audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un comunicado que entre otros conceptos expresa: Superados los alogos momentos de intimidaciones, atropellos, crímenes y atentados, que también padecieron integrantes de nuestro sector, el país puede mostrarse abierto al mundo para que se lo juzgue tal cual es, recorriendo, no sin sacrificios, el camino definitivo hacia la paz, el orden y el trabajo fecundo que nos permitirá recuperar el lugar de privilegio que otrora ocupáramos entre las naciones.

DENUNCIAN AGRESION DEL TOTALITARISMO AL PAIS

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 16 (De nuestro corresponsal). — No menos de 150 denuncias de personas prontamente desaparecidas se habrán recibido ayer a la mañana en el hotel con el que se aloja el personal de la CIDH, y se esperaban otras 70 antes de concluir el día. Ningún miembro titular de la comisión ha viajado a esta ciudad, pero sí lo han hecho los asesores Velazco Clark y Roberto Noris, este último llegado desde Córdoba en compañía de la secretaria Yoli de Toro.

♦ DECLARACION DE ADEBA

Tras la entrevista que los doctores Narciso Ocampo, Alberto Berro y Norberto Peruzzetti, directivos de la Asociación de Bancos Argentinos, efectuaron ayer con miembros de la CIDH, aquella entidad emitió un comunicado denunciando "la agresión del totalitarismo" contra nuestro país, "alentada, justificada y respaldada por grupos ideológicos de claro signo totalitario y extranje-

ro... ejecutores de los más horribles crímenes contra la comunidad".

"Este cuadro llevó al país, junto al mayor de gobierno de la historia política nacional, al caos y a la guerra."

"Esperamos que la presencia en nuestro país de la CIDH —dice más adelante la declaración—, invitada por el Gobierno Nacional, sea un medio de esclarecimiento para la opinión internacional de la verdadera realidad argentina, gravemente distorsionada por elementos del terrorismo".

Tras recordar la honrosa tradición argentina sobre derechos humanos, "ADEBA, que sufrió en muchos de sus miembros los embates de la guerra, en su carácter de entidad empresaria, representativa de un sector de la actividad económica y comprometida con los intereses nacionales, expresa su opinión objetiva que refleja el pensamiento unánime de una sociedad harta de violencia, de desorden, de demagogia y de indecencia política".

Al caso Cámpora se refirió Vargas Carreño

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) doctor Edmundo Vargas Carreño ofreció ayer una conferencia de prensa en la sede de la OEA, en un curso desmintió las declaraciones que un medio periodístico le atribuyó al señor Jorge Lawton.

Agregó que éste, además de no estar autorizado a formular declaraciones, nunca había expresado los conceptos que se le atribuyen. El señor Lawton forma parte del personal auxiliar de la Comisión, y las declaraciones que en un momento se le atribuyeron hacían referencia a la posible existencia de campos de concentración en nuestro país.

La entrevista con Cámpora

Preguntado sobre los resultados de la entrevista que algunos miembros de la Comisión —entre ellos su propio presidente, Andrés Bitttel— habrían mantenido anteayer con Héctor J. Cámpora y sobre la cual informamos oportunamente, el secretario ejecutivo de la CIDH señaló que nada podía decir al respecto. Ante la insistencia periodística, para que confirmase o desmintiese la reunión con Cámpora, ya que

a Comisión concurrió dos veces a la embajada de México, Vargas Carreño manifestó solamente que "aún no hay fecha para dicha reunión".

Tal como informamos en nuestra edición de ayer —en la cual señalamos la entrevista con Cámpora—, una subcomisión de la CIDH concurrió anteayer a la embajada de México, permaneciendo en ella desde las 14.45 hasta las 16.30. Al respecto, Vargas Carreño señaló que efectivamente "la Comisión había concurrido a la embajada, manteniendo contactos con el embajador, José Antonio Jara Villareal, e informándose de la situación de los asilados".

"Deben darle el salvoconducto"

Como se sabe, en la sede diplomática mexicana se hallan asilados Héctor J. Cámpora, su hijo y Abel Medina. Ante una pregunta en el sentido de si la visita había estado relacionada con la posibilidad que el ex presidente y sus acompañantes abandonen próximamente el país, Vargas Carreño señaló que "indirectamente sí".

Aclaró luego que "el embajador de México nos ha pedido que transmitamos a us-

tedes su impresión en el sentido de que el gobierno mexicano considere al doctor Cámpora como un refugiado político, por lo cual —a juicio del embajador— el gobierno argentino debe concederle el salvoconducto para que abandone el país".

Subrayó que "este no es un juicio de valor de la comisión, sino una transmisión literal a la prensa de lo que nos ha pedido el embajador de México les manifestemos a ustedes".

Añadió que el gobierno mexicano, cuyo concepto en este sentido se apoya en el derecho internacional americano, calificó a Cámpora, a su hijo y a Abel Medina como "asilados políticos" y manifestó que "el gobierno argentino aún no ha respondido a la nota de calificación de México".

El caso Bitttel

Ante una pregunta respecto de cuál es su opinión en cuanto a una posible acción judicial contra el vicepresidente 1° en ejercicio de la presidencia del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Deolindo Bitttel, por el contenido de la declaración entregada a la comisión y teniendo en cuenta una afirmación de ésta en el sentido de que no se adoptarían

represalias contra quienes presentaran testimonios, Vargas Carreño indicó que iba a dividir la respuesta en dos partes.

"La primera —dijo— es que desconozco los alcances del problema judicial, planteado en torno del señor Bitttel, y entiendo que su dilucidación es de resorte exclusivo de la justicia argentina. La segunda, es que el gobierno argentino nos ha garantizado que no adoptará represalias contra las personas que acudan a entregar sus denuncias o testimonios a la comisión".

La CIDH continuó con sus tareas en Capital e interior

Mientras daba por concluida su labor en la ciudad de Córdoba la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varios de sus integrantes se trasladaban a San Miguel de Tucumán, continuaron durante la mañana de la víspera en esta Capital la recepción de denuncias y las entrevistas con representantes de entidades diversas. Ingresaron a las oficinas de la Comisión, que funcionan en la Avenida de Mayo, directivos del Círculo de Ingenieros, de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, de la Fundación Piñero Pacheco y de las Coordinadoras de Empresas de la Alimentación y de Industrias Químicas y Petroquímicas.

Se observó también la presencia, entre las personas que aguardaban su turno para el ingreso a las oficinas de la CIDH, de la madre del boxeador argentino Oscar Bonavena, fallecido trágicamente en los Estados Unidos. La señora de Bonavena fue recibida por un funcionario de la CIDH, quien comprometió su ayuda en el caso.

Al reintegrarse a sus tareas en Buenos Aires, después de haber viajado a Córdoba, el miembro de la CIDH Luis Tinoco Castro manifestó a los periodistas

que en aquella ciudad habían asistido a todos los lugares que quisieron concurrir y se entrevistaron con todas las personas que deseaban entrevistar. Añadió que había cumplido su cometido con muchísima amplitud y con mucha libertad y afirmó: "Cumplimos hasta el último punto de la misión que nos habíamos propuesto".

Poco antes del mediodía y al arribar a la sede de la CIDH, el secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Vargas Carreño, anticipó en conferencia de prensa que "la Comisión entrevistará al ex presidente Héctor J. Cámpora antes del miércoles próximo", desmintiendo de esa manera versiones circulantes que daban por efectuada la entrevista. Informó el funcionario, al respecto, que miembros de la CIDH estuvieron el viernes último en la Embajada de México en Buenos Aires recogiendo informes y antecedentes con relación a los exiliados en esa Embajada.

A todo esto, en la ciudad de Tucumán, se registró ayer el arribo del asesor de la CIDH Robert Morris, procedente de Córdoba, al que acompaña la señora Yoli de Toro, secretaria de la Comisión. Ambos se sumaron a la tarea que venían cumpliendo en esa ciudad

otros asesores, la que se dio por concluida en la víspera en lo que respecta a la recepción de denuncias.

Asimismo, se conocieron diversas declaraciones de entidades civiles y empresarias con motivo de la visita de la CIDH a nuestro país. "A esta altura de sus gestiones los señores miembros de la CIDH habrán advertido, sin embargo, que la lucha frontal contra la subversión terrorista de inspiración marxista contó con un abrumador consenso nacional. Los argentinos nos sentimos orgullosos de haber vencido sin ayuda externa y pese a la incompreensión de gobiernos que debieron haber sido nuestros aliados naturales, al intento de penetración totalitaria que se ha registrado en América", dice, entre otros conceptos, el documento difundido por la Fundación Piñero-Pacheco. Contenidos coincidentes manifiestan las declaraciones efectuadas por la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, la Asociación de Bancos Argentinos, el Círculo de Ingenieros, la Corporación de Abogados Católicos y la Cámara Juniors de Buenos Aires.

6

Firme juicio de Suárez Mason

LA OPINION

16-9-79

El jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, general de división Carlos Guillermo Suárez Mason, —que viajó ayer a Santiago de Chile para participar de los actos de celebración de un nuevo aniversario de la independencia trasandina—, dijo con referencia a la actuación de la CIDH que "el veredicto final que ellos se formen es su problema. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que pasó en la Argentina y de lo que es ahora, y con eso a los argentinos nos basta, pues no necesitamos recomendaciones exteriores".



General Suárez Mason

Las declaraciones del alto jefe militar argentino fueron vertidas poco antes de partir a Santiago de Chile, donde fue abordado por periodistas de ese país. Dijo que había viajado a la capital trasandina por invitación de ese gobierno, para participar de los actos de celebración de un nuevo aniversario de la independencia chilena "que es un motivo de alegría para todos los americanos".

Interrogado a su arribo a Chile sobre las relaciones bilaterales, dijo el general Suárez

Mason que "están en el mismo punto en que siempre han estado, a la espera, tal vez, de alguna definición". Y agregó: "Los países no se agotan en sus dificultades. Son históricamente perdurables."

● El comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Omar Graffigna, que se encuentra en Colombia, fue recibido ayer por el presidente de ese país, Julio Turbay Ayala. Graffigna está en visita oficial en Colombia hasta el martes próximo.

Suárez Mason opina sobre la visita

Comunicación 16-9-79

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Guillermo Suárez Mason, dijo ayer que la presencia en la Argentina de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), "es una decisión política de la Junta Militar y del señor Presidente" y que esperaba que se formasen "una impresión objetiva de lo que es el país".

También señaló que deseaba que "sepan calibrar lo que es nuestro país" y acotó que "no tengo hasta el momento ningún indicio en contrario".

Suárez Mason hizo esas apreciaciones ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, poco antes de partir hacia Santiago de Chile donde participará de los actos celebratorios de un nuevo aniversario de la independencia de la nación trasandina.

En la oportunidad, señaló que los miembros de la CIDH "están trabajando

con entera libertad" y que estimaba que el dictamen que puedan formular "les será útil a todos".

Sobre este mismo tema señaló que "el veredicto final que ellos se formen es un problema de ellos. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que aquí pasó y de lo que es el país: ahora y con eso a los argentinos nos basta, pues no necesitamos recomendaciones exteriores".

El alto jefe militar también expresó en la oportunidad que iba a Santiago "con gusto y alegría", pues "más allá de las diferencias, es plausible que nos hayan invitado" a los festejos patrios.

Con respecto al diferendo del Beagle, dijo Suárez Mason que "no hay novedades comentables fuera de las que los periódicos dejan traslucir", y señaló que "la Santa Sede tiene este asunto en sus manos y trabaja despacio, creo yo que sesudamente. A eso se debe la lentitud".

J. POPULR 16-9-79

HABLA SUAREZ MASON

• El jefe del Estado Mayor, general del Ejército, general Guillermo Suárez Mason, señaló poco antes

de partir a Santiago de Chile que los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), "están trabajando con entera libertad".

contrario

"El veredicto final que ellos se formen —acotó— es problema de ellos. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que aquí pasó y de lo que es el país ahora, y con eso a los argentinos nos basta, pues no necesitamos recomendaciones exteriores".

Suárez Mason formuló esas declaraciones en el aeropuerto de Ezeiza, donde abordó con otros oficiales superiores del arma, el avión que los condujo a Santiago, con el propósito de participar, a partir de la próxima semana, de los actos celebratorios de un nuevo aniversario de la independencia de Chile.

Acompañan al general Suárez Mason, el coronel Alfredo Stera y su ayudante, mayor Rodolfo Molina.

El general Suárez Mason expresó también al dialogar con los periodistas en Ezeiza, que esperaba que los integrantes de la CIDH se formasen "una impresión objetiva de lo que es el país", y acotó que "no tengo hasta el momento ningún indicio en

LA NACIÓN 16-9-79

Opinó Suárez Mason sobre la Comisión

"El veredicto final que ellos se formen es problema de ellos. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que aquí pasó y de lo que es el país ahora, y con eso a los argentinos nos basta, pues no necesitamos recomendaciones exteriores." Así opinó el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Carlos Guillermo Suárez Mason, poco antes de partir hacia Santiago de Chile, al referirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Luego de formular aquel concepto, el jefe militar manifestó que de todas maneras aceptaba la decisión política del Gobierno de invitar al organismo, "que tiene su fundamento y como tal hay que aceptar y ayudar, como es nuestra obligación".

Sostuvo más adelante que los integrantes de

(Continúa en la página 14; columna 7)

(Continuación de la página 1; columna 5)

la Comisión "están trabajando con entera libertad y estimo que el dictamen que puedan formular les será útil a todos".

El general de división Suárez Mason manifestó su esperanza de que los miembros del organismo interamericano se formen una impresión objetiva de lo que es el país y lo sepan calibrar, para aclarar enseguida que no tiene hasta el momento ningún indicio en contrario.

Al referirse a otro tema, destacó su satisfacción por viajar a Chile, "ya que, más allá de las diferencias, es plausible que nos hayan invitado a los festejos patrios", agregó.

El jefe militar respondió que no "hay novedades comentables con respecto al diferendo del Beagle fuera de las que los periódicos dejan traslucir", y explicó que la lentitud se debe al trabajo que sesudamente realiza la Santa Sede.

Acompañan al general Suárez Mason el coronel Alfredo Stera y el mayor Rodolfo Molina.

Viajó a Chile el general Carlos G. Suárez Mason

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Carlos Guillermo Suárez Mason, dijo que la presencia en la Argentina de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, "es una decisión política de la Junta Militar y del señor presidente", y que esperaba que se formasen "una impresión objetiva de lo que es el país".

También señaló que deseaba "que sepan calibrar lo que es nuestro país y acotó: No tengo hasta el momento ningún indicio en contrario.

Suárez Mason hizo esas apreciaciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza poco antes de partir hacia Santiago de Chile, donde participará de los actos celebratorios de un nuevo aniversario de la independencia de la nación trasandina.

En la oportunidad señaló que los miembros de la CIDH "están trabajando con entera libertad" y que estimaba que el dictamen que puedan formular "les será útil a todos".

Sobre este mismo tema señaló que "el veredicto final que ellos se formen, es un problema de ellos. Nosotros

tenemos una visión muy clara de lo que aquí pasó y de lo que es el país. Ahora y con eso a los argentinos nos basta, pues no necesitamos recomendaciones exteriores".

Acotó luego que "de todas maneras acepto la decisión política del gobierno que tiene su fundamento y como tal hay que aceptar y ayudar como es nuestra obligación".
Chile

El jefe militar también expresó en la oportunidad que iba a Santiago "con gusto y alegría" pues "más allá de las diferencias es plausible que nos hayan invitado a los festejos patrios".

Con respecto al diferendo del Beagle dijo Suárez Mason que "no hay novedades comentables fuera de las que los periódicos dejan traslucir" y señaló que "la Santa Sede tiene este asunto en sus manos y trabaja despacio, creo yo que sesudamente. A eso se debe la lentitud".(NA)

Suárez Mason

"Los Argentinos no Necesitamos Recomendaciones Exteriores"

"El veredicto final que ellos se formen es un problema de ellos. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que aquí pasó y de lo que es el país, con eso, a los argentinos nos basta, pues no necesitamos recomendaciones exteriores".

Tales apreciaciones fueron vertidas ayer por el Jefe del Estado Mayor, general Guillermo Suárez Mason, al referirse a la labor que viene cumpliendo en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En improvisada rueda de prensa celebrada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde el alto jefe militar partió con destino a Chile, para participar de los festejos de un nuevo aniversario de la independencia del país trasandino, agregó que "la presencia de la CIDH es una decisión política de la Junta Militar y el señor Presidente", acotando luego que

esperaba que se forma en "una impresión objetiva de lo que es la Argentina".

Suárez Mason indicó también que la Comisión "está trabajando con entera libertad", señalando que estimaba que el dictamen que la misma pueda formular "les será útil a todos".

No obstante opinar que "los argentinos no necesitamos recomendaciones exteriores", el Jefe del Estado Mayor dijo que "de todas maneras la decisión política del gobierno tiene su fundamento y por lo tanto hay que aceptar y ayudar".

Al ser preguntado sobre el estado actual del diferendo limitrofe por el canal Beagle, Suárez Mason respondió que "no hay novedades comentables fuera de las que los periódicos dejan traslucir", agregando que "la Santa Sede tiene el asunto en sus manos y trabaja despacio, creo yo que sensadamente. A eso se debe la lentitud".

CLÓNICA 16-9-77

7

El general Suárez Mason dijo que la misión está trabajando con libertad

La CIDH "trabaja con entera libertad", y "el veredicto final que se forme para Chile. En Santiago se refirió a la especial significación que para los americanos en general y los argentinos en particular tiene la independencia de ese país, motivo de su viaje. Litigio austral: "Su Santidad trabaja despacio".

Poco antes de partir ayer para Santiago de Chile, para participar en los actos celebratorios de un nuevo aniversario de la independencia de ese país, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Carlos Guillermo Suárez Mason, señaló que los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "están trabajando con entera libertad".

Agregó al respecto que el veredicto final que ellos se formen es problema de ellos. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que aquí pasó y de lo que es el país ahora. Y con eso, a los argentinos nos basta, pues no necesitamos recomendaciones exteriores".

También manifestó a los periodistas que lo rodearon en Ezeiza que esperaba que los visitantes de la CIDH se formen "una impresión objetiva de lo que es el país". Finalmente, acotó: "No tengo ningún indicio en contrario".

Una vez en Santiago de Chile, el general Suárez Mason respondió a algunas preguntas sobre otros temas: "Las relaciones argentino-chilenas —dijo— están en el mismo punto en que siempre han estado, históricamente, a la espera, tal vez, de algunas definiciones".

Añadió luego: "Los países



General Carlos Suárez Mason, titular del Estado Mayor del Ejército.

no se agotan en sus dificultades. Son históricamente perdurables. Yo, como soldado argentino, tengo mucha fe en el porvenir, y sé que los soldados chilenos así la tienen".

Consultado sobre el motivo de su visita, respondió: "La independencia de Chile está por sobre todos los acontecimientos, de todo orden, por sobre todas las diferencias".

Sobre la mediación del papa Juan Pablo II en el litigio fronterizo austral, indicó: "No tengo más in-

formación que la recogida por el periodismo".

"No hay novedades que comentar fuera de las publicadas" —a cotó—. Su Santidad tiene el asunto en sus manos, y trabaja despacio, y trabaja despacio, y trabaja despacio. Supongo que a eso se debe su lentitud".

Reiteró que la independencia de Chile "es un acto de alegría para todos los americanos. Cómo no lo vamos a compartir los argentinos, que somos de la patria de José de San Martín?".

14.9

Opinión de Suárez Mason

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Carlos Guillermo Suárez Mason, afirmó ayer en Santiago de Chile, adonde viajó el sábado para participar en los actos conmemorativos de la independencia chilena, que es optimista sobre la posibilidad de superar las "ocasionales discusiones" entre ambos países, por el litigio limítrofe austral.

Dijo también que los vínculos argentino-chilenos se hallan "en el mismo punto en que siempre han estado históricamente, con algunas ocasionales discusiones que yo veo que se van a superar. Tengo en ello optimismo y fe en mi calidad de soldado, y sé que los soldados chilenos también tienen ese optimismo y esa fe".

En relación con la mediación papal y las actividades en tal sentido del cardenal Antonio Sampaio, el general Suárez Mason respondió: "No tengo más noticias que ustedes (los periodistas) porque solo conozco lo informado por la prensa".

Subversión y represión

Hechos y tendencias

Argentina paradójica: en las horas de mayor tensión interna, por hechos suscitados en torno de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegaba al país el primer contingente de refugiados indochinos dentro de un programa supervisado por las Naciones Unidas. Por un lado, la Argentina investigada; por el otro, la tierra promisoría para quienes escaparon de la persecución comunista.

Argentina indignada y Argentina perpleja. Por un lado, la reacción colérica a raíz del documento en el cual dos miembros del Consejo Nacional del Partido Justicialista sentaron por igual en un banquillo de acusados al terrorismo y al gobierno de las Fuerzas Armadas que, en una guerra abierta por esas bandas, derrotó a la subversión. Por otro lado, la duda y la incertidumbre, la cavilación intensa acerca de la procedencia de los estímulos e incitaciones externos al peronismo, e incluso al país, que pudieron haber contribuido a gestar la declaración firmada por el señor Deolindo Bittel (lo cual no quiere necesariamente decir que, además de firmarla, la haya redactado).

El miércoles, la fiesta callejera del lunes —espontánea en parte y en parte inducida— por el éxito futbolístico de Tokio parecía un hecho remoto. Demostración, pues, de la fugacidad de los sucesos e invitación a tener más en cuenta las líneas, las corrientes y las tendencias que los hechos, por significantes que sean. No escapará a esta ley tampoco el documento del señor Bittel, pero de lo que ahora se trata es de saber en qué forma seguirá obrando en el contexto general hasta ser un mero dato en la memoria.

El contraataque oficial

El Gobierno lo contestó inmediatamente, con fuerza, pero con cautela. Desde el miércoles ha quedado abierto un período en el cual el peronismo deberá aguantar un intenso chubasco. Es un período en que se recordarán vivamente sus responsabilidades históricas en el ejercicio de la violencia en el país. No sólo desde el asesinato del militar ilustre que fue el teniente general Aramburu, sino también desde mucho antes. Se le recordarán las muertes y las desapariciones de obreros en las huelgas de fines de los años cuarenta; en fin, se le imputará a Perón haber dicho en los años cincuenta: "A los enemigos, ni justicia". Eso y mucho más. Y si se advierte que la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución Libertadora comenzará hoy y seguirá a lo largo de una semana, se tendrá, por añadidura, señalada una coincidencia destinada a contribuir aún más al énfasis en los sentimientos adversos al peronismo, que han aguijoneado los hechos de esta semana.

La refutación oficial al señor Bittel exteriorizó un vigor nada común en las habituales expresiones gubernamentales. Pero, simultáneamente, esa refutación eludió atacar de manera global al peronismo. El comunicado de la Casa Rosada reprodujo, con intención obvia, el párrafo de la proclama de la Junta de Comandantes en Jefe, del 24 de marzo de 1976, cuando éstos dijeron que su pronunciamiento "...no supone discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno". La cita consiguió hacer perceptible una salvedad que el Gobierno consideró de decisiva importancia formular aun en el momento de mayor excitación general por el documento del señor Bittel. ¿Pero, por qué esa salvedad?

Cinco razones

En primer lugar, porque el tono de las declaraciones de los dirigentes gremiales peronistas que habían visitado a la CIDH difería notablemente del documento del señor Bittel. Para los gremialistas, la cuestión central en el debate sobre los derechos humanos en la Argentina ha sido la agresión de las bandas marxistas-leninistas. En

este caso particular, no se podía pedir a tales gremialistas más que eso ni que hubieran sido prolijos al extremo de incluir también en el origen del fenómeno de violencia generalizado al fermento fascista sobre el que se montó el asesinato de Aramburu.

En segundo lugar, la declaración que en nombre del señor Lorenzo Miguel dio en la calle a los periodistas el ex diputado nacional señor Carlos Gallo también tuvo un marcado contraste con los juicios emitidos por el señor Bittel.

En tercer lugar, el documento elaborado para la ex presidenta señora de Perón y firmado por ésta reflejó un espíritu que tampoco podía ser alcanzado con la severidad reservada para la opinión del vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Partido Justicialista.

En cuarto lugar, lo que seguramente el Gobierno ha debido plantearse como interrogante en el terreno táctico es hasta qué punto un intenso e indiscriminado contraataque sobre todas las posiciones del peronismo puede producir, como efecto no querido, que aborte en esa fuerza una crisis interna acelerada precisamente por la aparición del documento de Bittel.

En quinto lugar, la política oficial de las Fuerzas Armadas tiende a evitar que, aprovechando un circunstancial arrinconamiento del peronismo, la extrema izquierda saque ventajas netas para su propio beneficio. Más ahora, en que una de las incógnitas por resolverse es si algunos hombres de la vieja guardia del peronismo político no están siendo enredados por hilos sutiles de la Unión Soviética. Aquella política militar es notoriamente perceptible en cuanto al Ejército, que a pesar del reclamo de las expresiones más vigorosas del antiperonismo no ha mostrado interés alguno por que se revea el decreto de 1973 por el cual se reincorporó a Perón a sus filas.

Pero hay otros puntos más por ver todavía.

La ruptura

Lo que ya se sabe, lo que es extraordinariamente grave del documento de Bittel —y por más que sus declaraciones orales casi simultáneas hayan atemperado al texto escrito— es la ruptura con las Fuerzas Armadas o, dicho de otra manera, con la política de convergencia cívico-militar. A veces tal vez con diversidad de matices pero siempre con identidad de objetivo, dicha política ha estado presente en todas las manifestaciones procedentes de las Fuerzas Armadas.

Desde ese punto de vista, si el destino de las Fuerzas Armadas es retener por largo tiempo el poder o bien ejercer una influencia directa sobre la dirección de ese poder, el acto del señor Bittel y sus amigos ha sido temerario. Eso, entonces, sugiere un conflicto crítico con todas las otras corrientes del peronismo dispuestas a llegar a un cierto grado de entendimiento con los militares. Es el caso, por ejemplo, de una franja importante del sindicalismo.

La refutación del Gobierno tuvo, desde luego, una repercusión netamente favorable en la audiencia militar; pero en cuanto al efecto con el que obró sobre el peronismo cabe una distinción de otro orden. Por un lado, quizás frustró algunas adhesiones más de las que de otra manera podría haber extraído el sector encabezado por el señor Bittel en 24 horas de ajeteos enderezados a ese fin, es decir, tuvo un cierto efecto atemorizante; por otro lado, en cambio, dejó cerrado el camino para que inmediatamente pudieran alzarse de viva voz desde dentro del peronismo algunas figuras de peso dispuestas a enfrentarse con el firmante del controvertido documento. Sin duda, el Gobierno previó tal consecuencia, pero debió subordinarla a una cuestión prioritaria: la de reflejar a tiempo el estado de ánimo del frente interno militar.

Los Robledo, los Luder, los Paladino, la mayoría de los caudillos de provincia, etcétera, tienen una idea definida sobre la actitud del señor

Bittel, ¿pero cuántos están dispuestos a hacerla pública, tan próximos como estamos a la réplica del Gobierno? ¿Coincide, acaso, el ex gobernador Camus, presidente del Congreso del Partido Justicialista, con lo dicho por el señor Bittel? No sólo es cuestión de computar voces; es cuestión también de computar los silencios.

De cualquier forma, sería muy interesante conocer públicamente lo que el señor Camus piensa sobre el documento del señor Bittel. En particular, porque éste de los días que corren no ha sido un problema del antiverticalismo; es un problema dado esencialmente en el plano de las tres alas verticalistas: la del ultraverticalismo del señor Roca, y las de Bittel y Camus, cada uno por sus respectivos andariveles.

La crisis, o no

Ahora habrá que esperar un tiempo con el fin de percibir la exteriorización de la crisis que está larvada en el peronismo. Lo único que podría detener esa crisis sería el repliegue de todas las alas del peronismo a raíz de un fuego cruzado que lo alcance sin distinciones. En el repliegue, las condiciones suelen ser más favorables para la unidad. Las fuerzas políticas no se dividen tampoco en estado de congelamiento, sino en la plenitud de su acción. Pero ya tenemos un dato fundamental: el Gobierno ha hecho distinciones, y está dispuesto a seguir haciéndolas.

Esta es la hora, por otra parte, en que quienes pretendieron durante meses lanzarlo al doctor Balbín a la mesa de las conversaciones multipartidarias comprenderán su error. El de ellos, no el de Balbín, quien quiere la casualidad explícita francamente su política en esta materia al señor Bittel antes de hacerlo ante cualquier otro político ajeno a su partido. Bittel, a pesar de su empeño, no consiguió torcer la decisión de Balbín de mantener al radicalismo al margen de los pronunciamientos multipartidarios.

¿Endurecimiento pasajero?

Hay partidos que nada tienen que perder porque nada tienen, ¿pero en qué punto se encontraría hoy la UCR de haber firmado Balbín con Bittel algunos de los documentos multipartidarios previos al zafarrancho de esta semana?

Difícilmente se equivoque quien suponga un acentuado fastidio del jefe del radicalismo por el documento sobre el que centramos nuestro comentario de hoy. Pero lo que Balbín seguramente no podrá impedir a pesar de sus advertencias es una tendencia al endurecimiento general de las condiciones políticas. Ya se verá cuánto tendrá todo esto de pasajero, pero está en la punta de la lengua de cualquier político experimentado la pregunta de si el gobernador Saint Jean, de haberse demorado la crisis de su gabinete hasta esta semana, ¿no hubiera vacilado un poco más antes de desprenderse de un hombre como el Dr. Jaime Smart?

Balance

En el cúmulo de todas las opiniones habidas en estos últimos diez días, hay un párrafo que encierra seguramente el secreto de la solución política argentina para el drama de estos años. Es el párrafo con el cual se cierra la declaración de la junta nacional del Partido Demócrata Progresista. Dice así: "La paz debe sellarse en el respeto silencioso de nuestros muertos y en el compromiso absoluto de cerrar definitivamente esta trágica etapa de la vida nacional".

Entretanto, tal como se observa en La Vanguardia, órgano oficial del Partido Socialista Democrático, "el gobierno militar contó y cuenta con consenso sin que ello signifique eximirse de responsabilidad en cuanto a su histórico deber de restablecer plenamente el orden jurídico", y agrega: "La lucha contra el terrorismo adquiere valor en función de la restitución del orden jurídico. Esta afirmación es más que lúcida declaración de abogados: es el sentido común del país entero que no olvida los orígenes del gran mal, ni los deberes de justicia".

La CIDH inicia entrevistas con autoridades nacionales

LA NACION 16-9-79

Concluyó ayer en la sede de la OEA la recepción de informes y denuncias por parte de familiares de presuntos desaparecidos, centro de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Poco antes de las 10.45 llegaron a las oficinas de la CIDH el presidente y el secretario general del Círculo de Ingenieros, Ramón Bías y Fernan-

do Fluguerto Mart, respectivamente, a quienes correspondía la primera audiencia acordada para la fecha por aquel organismo.

Minutos después se hicieron presentes los dirigentes de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, y más tarde del Movimiento Ortodoxo Justicialista.

A las 10.50 llegó el doctor Thomas Farer —uno de los miembros de la CIDH— a quien siguieron su colega, el doctor Francisco Bertrand Galindo, y el asesor Edgardo Paz Barnica.

A las 11.15 ingresaron sendas delegaciones de la coordinadora de las Empresas de la Industria de la Alimentación y de la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas.

El doctor Tinoco Castro, que recientemente volvió de Córdoba, llegó a la sede de la OEA sobre el filo del mediodía, señalando a LA NACION que las actividades de la CIDH en esas provincias se "habían desarrollado con entera normalidad".

350 audiencias

También se hicieron presentes el ex gobernador justicialista de Formosa, Antenor Gauna, y una delegación del Seminario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que incluye la denominada Pastoral Juvenil. Un vocero indicó que "la Comisión había recibido a 350 delegaciones y organizaciones, solamente en la Capital Federal", y que "los miembros de la CIDH se habían visto desbordados de trabajo debido a la gran (Cont. en la pág. 12; col. 4)

(Cont. de la pág. 1; col. 4) cantidad de denuncias particulares".

También fue recibida en audiencia una comisión de médicos cesantes, la que presentó una lista de los que habían sido declarados prescindibles en diversos hospitales. Un vocero señaló que dichas cesantías "fueron originadas por las leyes 21.260 y 21.274, y ninguno de los médicos cesanteados ha sido llamado a comparecer ante ningún tribunal bajo acusaciones de representar un factor real o potencial de perturbación".

Hoy no habrá actividad en la sede de la OEA, y los miembros de la CIDH que permanecen en Buenos Aires iniciarán lo que fue denominado por el asesor Vargas Carreño como "una nueva etapa en la labor de la Co-

Audiencias previstas de la Comisión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el jueves finalizará su actividad en el país, volverá a reunirse ese mismo día, en hora a determinar, con el canciller Carlos W. Pastor y con el presidente de la Nación.

Mañana, a las 10.30, los integrantes del organismo visitarán al jefe de Policía Federal, general de brigada Juan Bautista Sasiañi, y a las 16.30, harán lo propio con el Director Nacional del servicio Penitenciario Federal.

Al día siguiente, también a las 10.30, conversarán con el ministro de Educación y, a mediodía, con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de Cámara Federal. Por la tarde, a las 16.30, visitarán al titular de Justicia.

El miércoles, la única audiencia prevista hasta el momento, será con el ministro del Interior, a las 10.30.

misión", al referirse a las entrevistas con las autoridades argentinas, por iniciarse mañana.

En Tucumán

SAN MIGUEL DEL TUCUMÁN. — Al grupo de funcionarios de la CIDH integrado por el Dr. Manuel Velasco Cruz y señora Elsa Ergueta, que se encuentra desde el viernes último en esta ciudad, se sumaron ayer el asesor jurídico de ese organismo, Dr. Roberto Norris y la señora Yoli de Toro. Los nombrados recibieron a familiares de presuntos desaparecidos. También conversaron brevemente con el periodismo, indicando que la labor concluiría hoy, y que no se habían presentado dificultades para el cumplimiento de su cometido.

Víctimas de la subversión. En coincidencia con la presencia de los funcionarios de la comisión por la tarde en la iglesia catedral, se ofició una misa en memoria de las víctimas de la subversión. Posteriormente, al pie de la estatua a la Libertad, en la plaza Independencia, la comisión de solidaridad y homenaje a las víctimas del terrorismo, colocó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio. Un miembro de la entidad hizo uso de la palabra evocando a todos aquellos que murieron en defensa de los ideales de la patria, víctimas del marxismo.

Estudiantes

A su vez, alumnos de distintas facultades de la Universidad Nacional del Tucumán, hicieron entrega, con las firmas de más de un centenar de estudiantes, de una denuncia a la misión de la OEA sobre la violación de sus derechos como universitarios y como ciudadanos, de 1972 a 1975 "por miembros de ideologías contrarias a nuestro ser nacional". In-

dica el documento que durante ese período "se desvirtuaron nuestras instituciones, violaron nuestros derechos, boicoteando las actividades académicas por medio de tomas de facultades, difusión de falsas alarmas sobre la existencia de artefactos explosivos y ataques verbales y físicos por medio de grupos, en su mayoría armados, a los estudiantes que no querían esas acciones".

Casildo Herrera

MADRID (AP). — Casildo Herrera, ex secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la Argentina, actualmente en exilio, y Carlos A. Juárez, ex gobernador de la provincia de Santiago del Estero, desmintieron aquí versiones que los mencionaban en relación con recientes gestiones en su país.

Según informes de prensa publicados en España, donde ambos viven exiliados, su nombres figuraban entre los de un número de dirigentes políticos y sindicales peronistas que emitieron un reciente pronunciamiento en la cuestión de los desaparecidos y presos políticos.

Herrera y Juárez declararon textualmente: "informados de que nuestros nombres figuran en telegramas fraguados, en supuesta defensa de derechos humanos, los desvirtuamos por absoluta falsedad material y recusamos el procedimiento antipatriótico de utilizar foros extranjeros para intentar menoscabar el prestigio del país, que resulta su final destinatario.

"Reiteramos nuestro permansión, causante de la desestabilización institucional de la República. Que esta manifestación valga para cualquier otra maniobra espuria destinada a sorprender la buena fe pública con comunicados apócrifos".

Víctimas de la Guerrilla: Misa

SAN MIGUEL DEL TUCUMÁN, 16 (De nuestro corresponsal). — El capitán policial, R. P. Fernando Urbano Fernández, ofició en la Catedral una misa impetratoria por las víctimas del terrorismo, auspiciada por la Comisión de Solidaridad y Homenaje de dichas víctimas.

Asistieron a la misa familiares de los fallecidos a consecuencia de actos terroristas.

Cronico 16-9-79

CIDH: Recepción de

• Comienza Etapa de Recopilación



Nueva conferencia de prensa ofreció la Comisión de la OEA, aclarando, entre otras cosas, "que todavía no vieron a Cámpora". También respondieron a diversas preguntas.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor Andrés Aguilar, desmintió ayer la versión publicada por un matutino que no es CRONICA en el sentido de que el organismo se hubiera entrevistado ya con el ex presidente de la Nación doctor Héctor J. Cámpora, asilado desde el 24 de marzo de 1976 en la embajada de México en Buenos Aires. El secretario ejecutivo de la comisión, doctor Edmundo Vargas Carreño, por su parte, confirmó, en conferencia de prensa, la priniicia exclusiva de CRONICA respecto del caso, al informar que el cuerpo de juristas extranjeros ha realizado gestiones ante el embajador mexicano para visitar al Dr. Cámpora, lo que se concretará durante la semana que hoy comienza.

Durante la mañana de ayer la comisión recibió en su sede de la avenida de Mayo 760, donde funciona la representación metropolitana de la Organización de Estados Americanos, a delegaciones empresarias y representantes de otras entidades. Simultáneamente prosiguió atendiendo la presentación de denuncias sobre personas desaparecidas, tarea que concluyó definitivamente a las 18.30. El organismo dedicará este fin de semana a la recopilación y clasificación de datos, y mañana emprenderá la última etapa de su labor en el país.

◆ DELEGACIONES

Poco antes de las 10.45 fueron atendidos por miembros de la Comisión, en la primera

audiencia de la jornada, el presidente y el secretario general del Circulo de Ingenieros. Minutos después concurrieron dirigentes de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel. A continuación lo hicieron los dirigentes del Movimiento Ortodoxo Justicialista, encabezados por la ex diputada nacional señora Rosaura Isla. A las 11.15 el organismo continental recibió en el edificio de la OEA a delegaciones de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y de la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas. A las 11.45 se hizo presente una delegación del Seminario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y poco después del mediodía arribó el ex gobernador justicialista de la provincia de Formosa, señor Antenor Gauna.

Por otra parte, entregaron declaraciones a la Comisión representaciones de la Asociación de Bancos Argentinos, de la Fundación Piñero Pacheco y de las juventudes de los partidos Intransigente y Socialista Popular, así como también de la Federación Juvenil Comunista, que pusieron en manos de los juristas extranjeros datos complementarios de los que habían hecho llegar el lunes último sobre la situación del país en materia de derechos humanos.

◆ DESMIENTEN VERSION

Al comenzar, al mediodía, la habitual reunión con los cronistas de los medios de difusión, el doctor Vargas Carreño señaló

10

Crónica 16.9.79

10

HERRERAS Y JUAREZ: "NO FIRMAMOS NADA"

MADRID, 15 (AP) — Casildo Herreras, ex secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la Argentina, actualmente en el exilio, y Carlos A. Juárez, ex gobernador de la provincia de Santiago del Estero, desmintieron aquí versiones que los mencionaban en relación con recientes gestiones en su país.

Según informes de prensa publicados en España, donde ambos viven exiliados, sus nombres figuraban entre los de un número de dirigentes políticos y sindicales peronistas que emitieron un reciente pronunciamiento en la cuestión de los desaparecidos y presos políticos.

Herreras y Juárez declararon textualmente: "Informados de que nuestros nombres figuran en telegramas fraudados, en supuesta defensa de derechos humanos, los desvirtuamos por absoluta falsedad material y recusamos el procedimiento antipatriótico de utilizar foros extranjeros para intentar menoscabar el prestigio del país, que resulta su final destinatario.

"Reiteramos nuestro permanente repudio a la subversión, causante de la desestabilización institucional de la República. Que esta manifestación valga para cualquier otra maniobra espuria destinada a sorprender la buena fe pública con comunicados apócrifos".

"TODAVIA HAY TIEMPO"

Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió cerrar ayer por la tarde el registro de los informes y denuncias formulados por particulares sobre casos de presuntos desaparecidos, los interesados en hacer presentaciones de esa índole tienen aún la posibilidad de dirigirse a ese organismo internacional, que —como se sabe— ha instalado sus oficinas de atención en el edificio de la Avenida de Mayo 769, sede

de la Organización de Estados Americanos.

Uno de los secretarios de la Comisión informó ayer, en efecto, que el cuerpo de juristas extranjeros había resuelto concluir con la recepción de esas denuncias, sin perjuicio de que pudiera considerarse particularmente algún pedido adicional que le fuera formulado hasta las primeras horas de hoy por familiares o representantes de presuntos desaparecidos.

SOLICITADA

AV. ...

LN. 16-9-79

A LA OPINION PUBLICA

El Pueblo Argentino ha leído con sorpresa el comunicado del Movimiento Justicialista. El de las legítimas aspiraciones espirituales y materiales. El de la sociedad igualitaria, de la Independencia Económica, de la Soberanía Política.

La lectura de esa pieza nos ha hecho reflexionar en cuán débil es la memoria de algunos declamados dirigentes políticos.

¿Qué pretenden? ¿a qué aspiran estos hombres? ¿qué hay en la mente de los oficiantes del exterminio, tutelados por los númenes del caos?

Nos llama la atención que pretendan que el pueblo sea frágil de memoria. Es que en ellos germinan las decisiones más siniestras ejecutadas con alevosía y traición.

Hablan de su líder, pero son traidores a su memoria y filosofía. Hoy concurren a besar la mano y a llorar como mujeres lo que no han sabido defender como hombres. Traicionan la doctrina y a su conductor, que no vaciló en echar de la Plaza de Mayo a los asesinos y desviados del movimiento. Olvidan la Soberanía y se inclinan llorosos ante organizaciones internacionales, que pretenden enseñar a los argentinos cómo deben vivir. Emulos seguidores de los BRADEN ayer, y los CARTER, THOMAS RESTON o EDWARD KENNEDY hoy. Estos que recibieron la responsabilidad de continuar la tarea de su líder no vacilaron en olvidar doctrina, militancia y Patria y llevar al país al caos Político, Económico y Social. Crearon las 3 A y olvidaron el axioma: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.

Las pseudo legítimas aspiraciones apuntadas, materiales, por supuesto, no fueron para el hombre argentino, sino para el dirigente partidario, que supo aprovecharlas en su propio beneficio olvidando lógicamente al pueblo.

Estos detractores apátridas que no vacilan en poner en sus labios palabras de S. Santidad, de las cuales queremos rescatar: "que prevalezca la verdad"

Los argentinos perdonamos pero no padecemos de amnesia.

Señores firmantes del documento, ¿cómo es que véis la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga en el tuyo? ¡Hipócrita!, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para quitar la paja del ojo de tu hermano. (Evangelio según S. Mateo).

MO. JU. NA.

MOVIMIENTO DE JUVENTUD NACIONALISTAS

¿DERECHOS HUMANOS?

hoy los invocan quienes pretenden proteger a los guerrilleros comunistas ejecutores de las acciones más crueles e infames que soporta el mundo contemporáneo.

hoy los invocan como estratagema ética de un mundo inmoral, personajes internacionales que parecen haber olvidado las bombas atómicas sobre ciudades indefensas, el muro de Berlín que encierra el "paraíso" marxista, los camboyanos y vietnamitas asesinados y los que están abandonados a su suerte en la soledad del océano y el horrendo crimen legalizado del aborto, que promueven y organizan a escala mundial, suprimiendo el primer derecho humano: el derecho a nacer.

hoy los invocan quienes con la protección de intereses inconfesables, hacen continuamente escarnio de ellos, asesinando a quienes sustentan valores morales y éticos opuestos al marxismo y sus aliados.

Los argentinos no olvidamos las "cárceles del pueblo" donde tantos compatriotas padecieron el suplicio; no olvidamos las bombas, secuestros, torturas y asesinatos de niños, mujeres y hombres. No lo olvidamos por haberlo padecido, pero también porque nos lo recuerdan ahora, diariamente, las noticias que llegan desde todas las áreas del mundo libre sometido a un constante ataque de la subversión; la misma subversión que en nuestro país fue derrotada por el espíritu de una comunidad aferrada a su tradición y con fe en el porvenir. Pero sobre todo tampoco olvidamos la complicidad de los mismos de siempre que nos pusieron a merced, aquí en la Argentina, de asesinos amnistiados el 25 de Mayo de 1973, con el respaldo unánime de los políticos elegidos para el Parlamento. Y en estos días, una vez más, se quitan la máscara quienes pretenden volver a controlar el poder político en nuestro país, para dar rienda suelta a innobles pasiones y oscuros fines. Ya sabemos qué es lo que aguarda a los argentinos, en caso que retornen los mismos responsables de aquel nefasto 25 de Mayo de 1973.

El Pueblo argentino nació a la libertad suprimiendo la esclavitud y tiene en su historia sobra-

das muestras de generosidad y respeto por la dignidad humana. Por eso se alzó contra la agresión; por eso, como en sus mejores momentos, en la vanguardia de la lucha estuvieron y están sus invictas fuerzas armadas; invictas para siempre.

Los agentes del caos, que fueron derrotados por la Nación toda, hoy pretenden reconstituirse con el apoyo extranjero, en abierta ofensa a los más altos intereses de nuestra Patria. Sabemos que la titulada C.I.D.H., que vino por el "permiso" de las actuales autoridades, nada tiene que criticar a un pueblo históricamente derecho y humano; sabemos que nuestra concepción cristiana de la vida y de la sociedad, de nuestra libertad y de nuestra soberanía, no tenemos que discutirla con nadie.

Sabemos también de planes internacionales para someter a nuestra comunidad a estilos de vida que configuran el satelismo y la esclavitud, pero fundamentalmente sabemos que Argentina es un país unido y sus habitantes están decididos a dar clara y pronta respuesta a quienes intenten mancillar su pabellón y desviar su recto sentido de la vida. No obstante, es menester sostener una constante vigilia, porque visto está que enmascarados en enunciaciones democráticas acechan el comunismo y sus aliados, que aspiran a recrear —con amplitud— el período de horror y angustia que superamos en años no lejanos. Con serena responsabilidad, a los agentes de la destrucción y sus cómplices podemos advertirles: Han perdido la guerra que nos impusieron. Pretendieron derrotarnos y fueron derrotados. ¡No volverán, porque hay millones de argentinos dispuestos a cubrir el lugar de aquellos que dieron sus vidas para señalarmos el camino de la soberanía y de la libertad!

Por todo lo expresado nos resulta imposible permanecer en silencio ante las expresiones tendenciosas sobre los "Derechos Humanos", que precisamente sus exclusivos violadores vienen ahora a enrostrar a quienes defienden la paz y el progreso de nuestra Nación.

¡LA PATRIA LIBRE Y CRISTIANA RENACE FORTALECIDA Y COMPROMETIDA POR LA OFRENDA DE SUS MARTIRES!

ESTE MENSAJE HA SIDO PUBLICADO MEDIANTE EL GENEROSO Y PATRIOTICO APORTE DE EMPRESARIOS, TRABAJADORES, ESTUDIANTES, ARTISTAS, CIENTIFICOS, RELIGIOSOS Y DEPORTISTAS DEL PAIS.

Curuzú Cuatiá alimenta recuerdos

Se aguarda una arenga pródiga en definiciones

Escribe
Roberto García

A 24 años de la sublevación que derribó al régimen peronista, hoy en Curuzú Cuatiá, a las 11, se descubrirá un busto del teniente general Aramburu y el entonces mayor Juan José Montiel Forzano —hoy coronel en situación de retiro—, cabeza de la rebelión en el lugar, brindará un discurso conmemorativo. En esta ocasión, la ceremonia contará con una nutrida audiencia, entre la cual se habrán de advertir algunos oficiales en actividad que, en aquella época, eran los capitanes y tenientes que acompañaron a Montiel Forzano en el pronunciamiento.

Objetivamente, el mensaje de hoy se inserta —aunque ese tal vez no hubiera sido su propósito original— en el contexto actual, dentro del intercambio de comunicados que esta semana se cruzaron el peronismo y el gobierno a propósito de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y las palabras de Montiel Forzano seguramente marcarán aun más los límites de la brecha que se observa en este momento.

Se entiende que la primera parte de la alocución estará reservada para honrar la memoria de Aramburu —por último, jefe de las unidades sublevadas en Curuzú Cuatiá—, recuerdo que seguramente será englobado con la revisión de una frase histórica: "Un buen morir honra toda una vida".

Pero, en términos políticos, las extensas reflexiones posteriores que hará Montiel Forzano sobre ese episodio serán las que habrán de devolver actualidad a un hecho sucedido hace ya casi un cuarto de siglo. Porque en esta ocasión, el oficial retirado dirá que el tiempo y otros hechos ocurridos en los últimos años probaron que no estaban equivocados los hombres que emprendieron esa sublevación.

Y el juicio de Montiel Forzano, denostando toda una administración —por obsecuente, inepta y corrupta— se extenderá también a los que él llama aventureros de la política que, más tarde, enredaron a la Revolución Libertadora para limitarse y fijar plazos electorales, abriendo el camino otra vez a los pactos y claudicaciones que permitieron el regreso de los genuflexos y venales que fueron despedidos en 1955.

Para él, la gravedad de este episodio se acentúa porque en ese retomo también se acoplaron los delincuentes subversivos —ungidos con el pretexto de las "grandes mayorías populares"—, los que a la postre serían los asesinos de Aramburu. Reflexionará también sobre los políticos que, desde la ignorancia de su soberbia, suponían que serían capaces de sumar al marxismo en sus filas.

El discurso no ahorrará ejemplos de lo que Montiel Forzano considera agravios para la patria, los que a veces son olvidados por una propensión generosa de los argentinos. Según él, no debe haber olvidos porque esa es la única forma de evitar que surjan voces —como dice— que ocurre ahora otra vez que



General Pedro E. Aramburu

piden por los equivocados y arrepentidos.

La misericordia, para el oficial, debe ser a favor del pueblo argentino, impidiendo que ingresen a las instituciones aquellos que antes las prostituyeron. Tras esto, criticará a una clase dirigente que ha sumido en la mediocridad los últimos 40 años de vida del país, y es la misma gente que hoy reclama ser consultada u opinar sobre asuntos que hacen al futuro del Proceso argentino.

Sostiene que su alerta es para que las Fuerzas Armadas tengan siempre presentes sus objetivos de reorganización, y el modo de implementarlos, únicos recursos para impedir que el Proceso se agote en sí mismo. Olvidar esto, cree, permitirá a los mercachifles de la política apelar a las "coincidencias programáticas", "frentes" o "reuniones multipartidarias" con la obvia intención de recuperar el poder.

Por estas razones, Montiel Forzano piensa que el sacrificio cruento e incruento que ha realizado el país no debe someterse a la impaciencia ni a la urgencia electoral. Habrá de puntualizar que reconstruir demanda mucho más esfuerzo, serenidad y reflexión, que destruir. De ahí que justifique la ansiedad por el futuro argentino, pero no la impaciencia. Sobre todo, la de aquellos políticos que aspiran al poder por el poder mismo.

Dentro de este esquema conceptual habrá que ubicar las polémicas palabras que esta mañana, en Curuzú Cuatiá, habrá de pronunciar el coronel (RE) Montiel Forzano ante un nuevo busto que recuerda al teniente general Aramburu y a los episodios que precedieron al derrocamiento del peronismo en setiembre de 1955. Pero este discurso, quizás, se relacione mucho más con la hora actual que con aquella sublevación de hace casi un cuarto de siglo.

Se acerca a su fin la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos invitada al país por el Gobierno argentino. Labor que se cumplió con facilidades y hasta cierto grado de cordialidad entre observadores y observados que de ninguna manera puede considerarse un presagio respecto de las conclusiones a las que arriben los visitantes una vez que analicen sus impresiones.

De todas formas, de las pocas declaraciones efectuadas por los miembros de la Comisión, se pueden extraer objetivamente dos elementos de juicio.

● Los visitantes parecen haber comprendido las diferencias profundas que existen entre el concepto de detenido por causas subversivas y preso político. No encontraron en las cárceles gente detenida por sus ideas, sino por su acción o su idea en favor del desarrollo de las tácticas extremistas.

● Pero al mismo tiempo, la observación de los miembros de la Comisión está estrictamente referida al comportamiento del Gobierno respecto de los derechos humanos y no de la subversión. Esa posición podrá parecer unilateral e injusta, pero también hay que entender que los miembros de la OEA actúan en función de la organización de gobiernos y no como un tribunal cualquiera formado por ciudadanos preocupados por un problema. En ese aspecto, quienes derrotaron a la subversión tienen más que perder que la propia subversión, ya que la lupa sobre los métodos está puesta sobre las autoridades y no sobre quienes fomentaron la violencia. Sin embargo, es posible que la Comisión, aunque sea capaz de producir un dictamen nada grato para las Fuerzas Armadas, tenga en cuenta la acción del terrorismo no para calificarlo pero sí para tener noción justa del contexto en el que podrían haberse producido los hechos cuestionables.

De todas formas, el tema de los derechos humanos puso nuevamente sobre el tapete y en forma bastante insólita una de las verdaderas raíces de la crisis argentina, de neto corte político. Hay dirigentes políticos —de alguna forma hay que denominarlos que nunca aprendieron nada, que nada han aprendido ahora y que jamás lograrán aprender nada.

A las pocas horas de que miembros de la Comisión visitaran a María Estela Martínez, llegó a las redacciones de los diarios un pronunciamiento de la ex presidente peronista. Lejos de tener el dramatismo de los manuscritos del Conde de Montecristo o de estar escrito con una ramita de abedul y usando a guisa de tinta sangre diluida en lágrimas, el documento venía muy bien presentadito, como de una oficina de prensa que más se quisiera tener en alguna repartición oficial.

La señora Martínez viuda de Perón tiene en su curriculum conocimientos parciales de magisterio y danza. Tiempo después, si es que el fenómeno de ósmosis política existe, pudo haber adquirido algunos conocimientos sobre

Tras los pasos políticos del Proceso

Un documento que puede significar el riesgo de ser un "boomerang"

Escrito por
Eduardo J. Parages

Lo interesante es analizar por qué se produjo ese documento. Primero habría que decir que los militares, no sólo argentinos sino de todo el mundo, fueron, son y serán bastante esquemáticos en lo que a política se refiere. En tal aspecto, algunos sectores de las Fuerzas Armadas han conformado una suerte de cuadro posicional de los sectores políticos existentes.

● **Partidos que apoyan el Proceso:** Partidos provinciales, especialmente los integrantes de la Fuerza Federalista Popular cuando la candidatura de Francisco Manrique.

● **Partidos que sin apoyar directamente al Proceso no lo obstruyen premeditadamente y aspiran a que logre una solución que permita el retorno a la democracia:** Unión Cívica Radical, sectores de la democracia cristiana, desarrollismo, intransigentes y corpúsculos menores tanto del socialismo como del conservatismo no enrolado en la FUFPEO.

● **Adversarios del Proceso:** Justicialistas y comunistas.

● **Enemigos del Proceso:** La subversión marxista.

Dentro de ese esquema, que por supuesto no es rígido en la realidad como nada es rígido en política, cabe recordar que el justicialismo partidista —valga el término para separarlo de la extracción sindical— empezó por romper lanzas con el comunismo pro soviético mientras trataba de acercarse al radicalismo sin mayores éxitos —la UCR no participó de la última redacción y firma de un documento multipartidario— y condenaba lisa y llanamente a la subversión. Este último punto es importante, porque la subversión intentará aprovechar el documento peronista como una demostración de descontento popular, que probablemente exista pero no en los términos de diatriba de la declaración. Los dirigentes peronistas parecieron querer formar un nuevo estamento del esquema: ser más enemigos que adversarios, pero no tan enemigos como para ser confundidos con la subversión.

¿Para qué?

● Para capitalizar el descontento popular por la situación económica, simplificando la ecuación inflación = Gobierno.

● Para recobrar fuerzas como partido político y ganar la confianza de los peronistas "ánimos", los que nunca militaron pero

siempre votaron. Esto es importante en algún futuro electoral si el país, en vez de lograr la convergencia cívico-militar, vuelve a caer en la trampa de la antinomia ciudadanía-Fuerzas Armadas.

● Para ganar repercusión internacional ante los Estados Unidos, la Trilateral, la internacional social-demócrata y la internacional social-cristiana, todas ellas coincidentes en la estrategia de la rápida democratización de América latina para hablar en el mismo lenguaje en los negocios internacionales.

Fuera ya del juicio que provoque esta estrategia, que en los momentos actuales es bastante disolvente respecto de las posibilidades de una auténtica unión nacional tras un proyecto político para varias décadas, cabe pensar que el justicialismo autor del documento corre un riesgo doble si se produce el efecto esquemático del pensamiento militar: 1) ser confundido con el rol de la subversión marxista, no en lo ideológico pero sí en los fines prácticos; 2) ser factor desencadenante de distanciamiento en el diálogo entre los políticos, porque aunque los otros partidos no aprueben la posición peronista, por obvias razones de buena vecindad no pueden condenarla y como quien calla otorga, las Fuerzas Armadas pueden mañana esgrimir ese silencio como una adhesión a la diatriba antimilitar.

Dos elementos quedan por evaluar en la evolución del caso. En primer lugar, observar la actitud política del sindicalismo, unido ahora en la CUTA y con la esperanza de no perder presencia aunque muchos privilegios se hayan ya volatilizado. Y luego medir de cerca los pasos de algunos sectores de pensamiento justicialista —Raúl Matera, Jorge Paladino, Enrique Osella Muñoz, Luis Rubeo y Victorio Catubra— que no pertenecen a la cúpula de dirigentes del peronismo partidista y parecerán propugnar el impulso de una nueva corriente política nacional.

Si los planes gremiales y los "neuroperonistas" desembocan en un acto político por lo menos tan lúcido como algunos de sus conductores, el efecto del documento en cuestión se irá diluyendo con el tiempo y en la misma medida en que se eclipsen sus autores. De no ser así, tal vez el peronismo representado por los firmantes de la declaración tenga en el futuro próximo el estamento de "enemigo" dentro del esquema militar, que por más político que sea no suele andar con vueltas...

El jueves pasado, en el acto de conmemoración del 173 aniversario del Regimiento de

Patricios, el jefe de esa unidad, coronel Teófilo Saa, produjo una definición tajante de contenido político insoslayable: "Al Regimiento de Infantería I Patricios —dijo— le cupo el privilegio y el honor de participar activa y eficazmente en la cruenta guerra que culminará con el categórico triunfo militar obtenido por las Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre la delincuencia subversiva terrorista, ese moderno y diabólico flagelo ateo, nihilista y apátrida, inspirado por el marxismo internacional... Es por ello —dijo también— que los Patricios también luchamos, como todos los argentinos que se precian de tales, en defensa de nuestras instituciones fundamentales y de nuestra existencia como Nación, revirtiendo el caos y reconquistando la tan ansiada paz, esa paz que aún debemos consolidar, pero que ya estamos disfrutando y exhibiendo al mundo con justificado orgullo para sorpresa y desconcierto de quienes no supieron o no pudieron comprender, y para frustración y desengaño de quienes no quisieron reconocer la verdad y justicia de nuestra causa."

El coronel Saa ratificó, en primer lugar, que para las Fuerzas Armadas la lucha contra la subversión fue un honor y no simplemente un acto de servicio que pudiera tener ribetes vergonzantes. Esa definición, efectuada durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aleja el problema argentino de los factores subjetivos de tipo político para ingresar en el calificativo directo de la guerra. Pero la arenga, además, habla de victoria militar y de paz conquistada y exhibida. El elemento es válido como intención demostrativa que si bien la comunidad americana puede hacer sus observaciones sobre los episodios de la guerra, no puede dejar de contemplar el fin de la guerra o sea el prelude de la paz.

En esa arenga habló el que ganó y no podría haber sido de otra forma, así como en Nicaragua ahora habla el comandante Pastora y no Somoza. Es un elemento que la Comisión debe haber tenido en cuenta: el de la franqueza, que implica responsabilidad.

El coronel Saa dice que combatió y la realidad exhibe que triunfó. Pero el coronel Saa no combatió en nombre de una acción irregular lanzada a la lucha para la toma del poder, sino en nombre de las Fuerzas Armadas regulares de un país atacado por el marxismo mediante la táctica de guerrillas.

Pero lo que la Comisión no podrá ignorar es que —más allá de los excesos condenables que pudieran haber existido— se ganó una paz y un estado de orden que los argentinos admiten, aunque tal vez no compartan masivamente la filosofía económica de las Fuerzas Armadas o algunas de sus técnicas administrativas.

En un juego de palabras que apunta a la lógica, se podría decir que la política de la paz está aceptada por los argentinos. Lo que no quiere decir que esté aceptada la paz de la política...



POLITICA NACIONAL

Bittel, un documento, la política interna y todo lo que puede pasar

por Carlos Fernández

Tal vez, para encontrar las razones por las cuales el vicepresidente primero del partido Justicialista, el escribano **Deolino Bittel**, tras su reunión con la CIDH emitió un comunicado que motivó la severa réplica gubernamental (calificado por un jefe militar de alta graduación como "clara y precisa"), convenga hacer un recuento de las instancias vividas dentro de la dirigencia justicialista en forma previa a la emisión de ese texto.

Ante la visita de la CIDH, viaje efectuado en respuesta a una invitación cursada por la Cancillería, y al trascender que la ex presidenta, **María Estela Martínez de Perón** se encontraba entre las personas con las que deseaban dialogar los funcionarios de la OEA, un sector de las autoridades partidarias estipuló que las únicas manifestaciones, en relación al caso, de producirse, deberían proceder, precisamente, de la ex mandataria.

La instancia política que significó esta visita de la CIDH y los consecuentes reacomodamientos que originó en las fuerzas partidarias —algo que se notó tanto por las expresiones como por los silencios— consiguió dentro del justicialismo que se concretara por primera vez, desde 1976, una reunión del consejo nacional partidario, frustrada hasta ese momento en más de una ocasión.

Fué en ese marco donde **Bittel** planteó la necesidad de que el organismo emitiera un documento sobre la situación nacional, ante la visita de la CIDH, en tanto que el secretario, señor **Lázaro Roca** sostuvo que la única manifestación en ese sentido debería provenir de la ex presidenta. Así las cosas planteadas volvía a reeditarse una confrontación interna, en la cual los interlocutores dirimían posiciones en cuanto a la conducción del consejo partidario. Hay quienes sostienen, en el justicialismo, que **Bittel** se oponía a convocarlo porque no contaba con la ma-

yoría necesaria para consolidar su accionar político como interlocutor de la agrupación, ante el resto de los partidos y porque temía que **Roca**, adversario de su accionar independiente, hubiera logrado ese consenso.

En el marco de esa puja, la negociación culminó en el acuerdo de que se emitirían dos documentos, pero apuntándose que el primero en darse a conocer sería el de la ex presidenta. A partir de allí, **Bittel** inició las gestiones para conseguir una audiencia con los integrantes de la CIDH, pero aclarando que debía producirse con posterioridad al encuentro en San Vicente.

En tanto el estudio jurídico del doctor **Vicente Saadi** habría sido el ámbito en el cual se reunió el "grupo redactor" del texto que posteriormente dio a conocer **Bittel**. Además del propio **Saadi**, a quien algunas versiones indicaban como el inspirador del documento, integran el grupo **José María Sarrabayrouse**, **Miguel Unamuno**, y el ex senador **Alejandro Díaz Biale**, aquel que seguía a **Héctor Cámpora** en la línea sucesoria.

Vicente Saadi es una figura con indudable predicamento sobre **Deolino Bittel**. Muy vinculado a la socialdemocracia europea, se encuentra además en buenos términos con el partido comunista de nuestro país. Fue él quien recibió las primeras protestas de **Fernando Nadra** cuando el dirigente justicialista **Spagnolo** decidió que el PC no integrará la multipartidaria juvenil. Algunas versiones, ya recogidas por algunos medios, indican que fue el propio **Saadi** quien urgió a **Bittel** para que invitara a **Spagnolo** a reconsiderar la situación.

Con el texto ya completo, **Bittel** intentó conseguir el apoyo del consejo partidario

para que lo hiciera suyo, circunstancia ésa que no puede concretar y que el propio **Lázaro Roca** se encargó de aclarar cuando apuntó, públicamente, que la expresión escrita del escribano chaqueño era necesario considerarla, "a título personal."

Pese a eso, horas después de conocida la declaración de la ex presidenta, la primera efectuada desde el 24 de marzo de 1976, **Bittel** dio a conocer su opinión. Pero en esta mecánica los observadores políticos no pudieron dejar de apreciar el detalle que significó que fuera **Lázaro Roca**, o la gente que trabaja con él, quienes repartieron la declaración después del diálogo de San Vicente, un hecho que no pudo haber escapado a la sensibilidad de **Bittel**. Como tampoco nadie pudo dejar de apreciar que **Bittel** concurrió por su lado a hablar con la CIDH y **Roca** por el suyo.

Y repasando el documento de **Bittel** hay un párrafo que rescata a quienes "...padecen cárceles en las embajadas" convirtiéndose así en la primera expresión pública en relación a la situación de **Héctor J. Cámpora** y **Abal Medina** ambos alojados en la Embajada de México. No se descarta, en la inclusión de ese párrafo, la influencia de **Pedro Cámpora** y **Nilda Garré**, próximos a **Vicente Saadi**.

En algunos círculos justicialistas, se señala la actitud de **Bittel** como el primer intento para recuperar un espacio perdido en el interior del justicialismo. Una membrana en la que se encuentran ligados, además, sectores que tienen buena comunicación con la socialdemocracia internacional. Y ya hay quienes, además, comienzan a hablar de "un neo camporismo". Habrá que ver cómo se desenvuelven las cosas, para saber si la comunidad política nacional, puede engendrar una nueva generación de dirigentes políticos, o decide caer víctima de reglas que ya deben ser superadas.

LA FRAGIL MEMORIA DE LOS PUEBLOS TAMBIEN TIENE SU LADO POSITIVO

En política hay que aprender que no se puede mimar a "Jaimito"

por Hugo Ezequiel Lezama

Hace pocos días le pregunté a un conspicuo yrigoyenista, en donde estaba enterrado **Don Hipólito**, si en la **Chacarita** o en la **Recoleta**. El fiel fanático titubeó, se pasó la mano por la frente, frunció las cejas, cambió de posición el escarbadiente y, amargado, me confesó: —¡**Sabe que en este momento no me acuerdo...**!— Y eso que el entierro de **Yrigoyen** fue el primero de los importantes del siglo (en la **Argentina**, claro) y convulsionó a **Buenos Aires** con una multitud nunca vista que se estrenaba en estas lides. Frágil es la memoria de los pueblos. Mi interlocutor no recordaba ya, ni el sitio en donde descansaban los restos de su ídolo. Por eso, por la desmemoria esencial de la gente, **los dioses políticos tienen supervivencia efímera** (lo efímero en historia se cuenta por años), **a menos que el Poder se encargue de mantenerlos vivos persiguiéndolos o negociándolos**. La única posición inteligente es la indiferencia. Lo histórico es histórico. Está en el pasado y es absurdo atar el presente a los muertos.

Decimos esto porque, justamente la indiferencia, es la actitud que todavía no se ha ensayado con el peronismo. La **Revolución Libertadora** fortaleció su memoria con candorosos decretos persecutorios y los gobiernos que vinieron después lo nutrieron con halagos, consultas y componendas. Los resultados los padecemos y se extienden hasta nuestros días. Hoy todavía encontramos hombres del **Poder** —oficial y no oficial— que

siguen intentado negociaciones con el peronismo político y con el peronismo sindical. Por eso las reuniones secretas, los murmullos, los "enlaces", las amenazas y los favores. Por eso, quizás la Ley de Asociaciones un parto para forceps y la de Obras Sociales pasa largas vacaciones en los cajones de los escritorios. Por eso el peronismo pone cara de niño que va a portarse bien y atiende educadamente a sus visitantes. Total, llegado el caso hará lo que se le dé la gana, dirá cualquier cosa, dejará estupefactos a sus aduladores, sabiendo que, pese a todo, el enojo será pasajero porque volverán a mimarlo con la secreta esperanza de que un día llene de la **Plaza de Mayo** ululando a favor de un candidato serio, como la gente, democrático y pulcro, que los acogerá en su seno aseado y patriótico para obtener esa alianza cívico-militar con la que algunos sueñan. Aunque parezca mentira, todavía hay poderosos que no se han convencido de que el peronismo es como **Jaimito**. Tienen que ocurrir episodios como los de esta semana, la inefable declaración de la viuda de **Perón** o las humillantes insolencias de **Bittel**, para que a algunos se les venga el alma al suelo.

Días atrás había miembros del **Poder** que aseguraban que el "verticalismo", con la viuda de **Perón** al frente, iba a sacudirle a la Comisión de

Derechos Humanos un documento que prácticamente sería casi una adhesión al **Proceso**. Claro, después vino la indignación, la ira y el estupor. Pero hubo muchos millones de argentinos que nos sentimos agraviados **pero no asombrados**. Era lógico que sucediera esto porque como dice **Borges**, "lo peor del peronismo es que es incorregible". Esta ha sido una demostración de fuerza, un globo de ensayo para ver cuál es el punto de fractura. Pero, además, es un ejemplo para los otros partidos que también se pondrán a parlotear para no perder terreno ante la calle. Es importante que el gobierno conserve la cabeza fría.

Ya salió al cruce por medio de un comunicado de la **Secretaría de Información Pública** —muy bueno, por cierto— y no debe ir mucho más allá. Desde luego que seguirán los coletazos por unos días. Seguramente veremos a sectores del peronismo acercarse al **Poder** para expresar su desagrado por lo sucedido. No serán pocos los que intenten **marcar su diferencia**, aun sacrificándolo a **Bittel**. Todo eso debe analizarse dentro de una acción programada y así como no hay que abandonar la serenidad, tampoco hay que dejarse seducir.

Ni esto ha sido un error de los "blandos", ni esto le da la razón a los "duros". Esto señala que al peronismo no hay que perseguirlo ni cortarlo; hay que ignorarlo porque, después de todo, **lo que más ama Jaimito es la notoriedad**.

Visitaron Cárceles de Caseros y La Plata

• El Jueves se van de Argentina

17

CRÓNICA
16-9-79

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerró ayer su ciclo de audiencias públicas para la recepción de denuncias y exposiciones, sin perjuicio de considerar al grupo edito adicional que pudiera registrarse en el día de hoy. En el último grupo de entidades recibidas predominaban las de carácter empresarial, cuyas manifestaciones coincidieron en condenar enérgicamente la subversión terrorista y destacar la labor del actual gobierno y las Fuerzas Armadas a favor de la unidad y la pacificación del país.

Durante la semana que se inicia, la comisión compulsará el material recogido y entrevistará a representantes oficiales.

Mañana a las 10.30 visitará al jefe de la Policía Federal, general Juan Bautista Saiz, y a la tarde hará lo mismo con el director del Servicio Penitenciario Federal.

El martes, también a las 10.30, se reunirá con el ministro de Educación, doctor Llerena. Al mediodía visitará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Federal. Por la tarde, a las 16.30, se reunirá con el ministro de Justicia, doctor Rodríguez Varela.

La única audiencia prevista para el miércoles es con el ministro del Interior, general de división Albano Harguindeguy, y al día siguiente, según trascendió, visitará al canciller, brigadier Carlos Washington Pastor.

Ese mismo día la comisión abandonará el país, dando fin a su misión, y no se prevé que prorrogue el plazo de estadía en la Argentina, aunque tampoco se descarta de plano esa posibilidad, pues, como lo destacó el secretario ejecutivo de la comisión, doctor Vargas Carreño, su tarea ha sido "abrumadora".

La única entrevista no oficial pendiente es con el doctor Héctor J. Cámpora, asilado en la embajada de México, que tendría lugar el próximo miércoles.

No cabe esperar un inmediato pronunciamiento evaluativo de carácter público por parte de la CIDH, que previamente elevará un informe al gobierno nacional a fin de poder recibir las observaciones que éste, por su parte, desee formular. Estimadas dichas observaciones, la CIDH redactará el informe definitivo, que se dará a conocer al gobierno, a la opinión pública y a la OEA.

El mismo día en que los integrantes de la comisión abandonen el país, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Omar Graffigna, abordará el tema de los derechos humanos en el curso del almuerzo mensual de la Cámara Argentina de Anunciantes, tema especialmente elegido por el citado jefe militar. Sus palabras se aguarían con interés, pues se consideran definitivas del punto de vista oficial al respecto.

♦ FAMILIA DESAPARECIDA

En su edición de la fecha, bajo un gran título a tres columnas en primera plana, el matutino "Buenos Aires Herald", que se edita en inglés en nuestra Capital, informa que la CIDH en pleno recibió ayer la denuncia de la desaparición de una familia constituida por Regino Adolfo González, de 31 años, su esposa María Consuelo Castaño Blanco de González, de 30, y sus tres hijitas Della Teresa, de 5, Eva Judi, de 4, y Mariana, de 3.

La denuncia fue formulada por los abuelos y otros parientes, quienes se enteraron de la desaparición a través de una tía que fue a visitar al matrimonio el viernes pasado en su domicilio de Ituzaingó 4642, Munro. La dueña que les alquilaba el departamento desde hace tres meses —según los denunciante— les habría informado que el jueves a la noche una fuerza armada que llegó en cinco autos e invocó carácter policial, se llevó encapuchada a la esposa, mientras las hijitas fueron conducidas en otro auto. En cuanto al marido, se presumía que ya había sido detenido en otro lugar. Uno de los abuelos expresó ante la Comisión que mañana lunes presentarán un recurso de hábeas corpus por las cinco personas presuntamente secuestradas. La información añade que el departamento quedó con la puerta abierta y las luces encendidas.

♦ HABLA VARGAS CARREÑO

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edmundo Vargas Carreño, dijo este mediodía que el organismo "expresó su profunda preocupación al gobierno argentino" por la desaparición de los miembros de una familia

"en momentos en la que Comisión cumple su gestión en el país".

Consultado específicamente por una noticia aparecida en la primera plana del diario "Buenos Aires Herald" en el día de hoy, según la cual el jueves pasado desapareció un matrimonio y sus tres hijas menores, Vargas Carreño admitió que "efectivamente ayer la Comisión tomó conocimiento de esta situación, recogiendo una denuncia de la familia y de inmediato, por los canales correspondientes, expresó su formal preocupación al gobierno argentino por el caso".

Paralelamente, el alto funcionario de la CIDH dijo que los miembros de la Comisión habían reunido o continuar sus trabajos durante toda la jornada de hoy, para lo cual un grupo del organismo se trasladó esta mañana a la cárcel de Caseros y otro, encabezado por el propio Vargas Carreño, viajó este mediodía por tercera vez a la ciudad de La Plata a la cárcel modelo Número 9,

délicos subversivos, encuadrados en el régimen de máxima seguridad.

♦ INDUSTRIALES MENDOCINOS

MENDOZA, 16 (De nuestro corresponsal). — La Unión Comercial e Industrial de Mendoza recuerda en un comunicado "la etapa de violencia incontrolada jamás conocida por nosotros, que amenazó con su desintegración como Estado y como Nación, para entregarnos a totalitarismos incompatibles con nuestro concepto de libertad y democracia". Gracias a las Fuerzas Armadas, "esa etapa pudo ser superada y los argentinos podemos vivir hoy con paz, respeto y libertad". "Es sobre un pasado reciente y que aún tiene heridas que cicatrizar que los juristas de la CIDH deberían investigar, si así lo estiman oportuno, para poder establecer un justo equilibrio donde impere la verdad y no las opiniones interesadas de quienes ya han sido condenados o enjuiciados por ser culpables directos o indirectos".

Es. Cos. Herald 16-9-79/8

Winds of change blow strongly

THE Inter-American Commission on Human Rights got down to work in earnest last week and the country is never likely to be the same again. After years of moody silence about the systematic violations of human rights that have been going on in our midst the press and the politicians suddenly found their voice. Some, with varying degrees of sincerity, squarely blamed the government or, more precisely, the security forces, for everything that has happened. Others, with desperate fervour, equally squarely blamed the populists who preceded it. More helpfully, a few honestly sought to identify the underlying moral flaw that made it possible for the social fabric to unravel so swiftly and permit cruelties that would have been hard to imagine a decade earlier. The most impressive statement by far came from the writer Ernesto Sábato. For him the break occurred when large numbers of people began to take it for granted that crimes can be justified or condemned according to the motives of those committing them, that the end, or the proclaimed end, justifies the means. Once this proposition is accepted, he pointed out, the road to barbarism is open and there will always be plenty of people willing to march along it. Crimes of terrorism, said Sábato, "should be answered by the law, with the harshest of laws, but with the law, with the strictest of courts, but with courts. Otherwise, an endless escalation of violence, of cruelty and of sadism is always the result. I hope my country can overcome this vicious circle, putting all prisoners at the disposal of normal courts under the rule of law, to punish those who have committed crimes and release the innocent."

This is what will, sooner or later, have to happen if Argentina is ever to return to "normality." The most troublesome aspect of the "dirty war" between the terrorists and the counter-insurgency forces has been the unwillingness or inability of the government to bring it to an end. Long after the terrorist gangs were ground down to a virtually invulnerable residue the no-holds-barred methods of the days when the battle was at its height continued to be used, with the counter-insurgency forces moving beyond the hard-core armed terrorists to those who may, or may not, have sympathized with them. The concept of "ideological subversion," so dear to some military hearts, vastly increased the available scope, enabling the people concer-

ned to hack away at neighbouring organs after having removed the cancerous tumours. Only now, it seems, is this terrible process coming to an end. The number of people "disappearing" is a fraction of what it was two years ago, let alone three. But, as the anaesthetic of fear is beginning to wear off, each individual "disappearance" is being noticed. Given the new sensitivity to infractions of the legal norms, every denunciation is a political setback for the government and far outweighs any possible operational gains. It is now clearly in the government's interest — and, even more so, in the interest of the armed forces and the country as a whole — to ensure that no more "disappearances" take place. The government is expendable, the armed forces and the country are not.

Sábato's statement may have been the most penetrating of the many that have been made, but its impact was tiny compared to that of the bomb lobbed into the political arena by the "verticalist" Peronist Deolindo Bittel, who is making a strong bid to inherit a large part of the legacy of the late Juan Domingo Perón. According to Bittel, the military were using leftist terrorism as an excuse to implant a system of state terrorism. This statement was the most explosive made by any significant political leader since the coup and may have constituted a declaration of war by the Peronists against the men who replaced them. Until now, the Peronists have been quite cooperative with the military, keeping alive the possibility of a deal at some time in the future. Their attacks on the government's economic policies have been harsh, but it is traditional in Argentina to make extraordinarily vehement condemnations of whoever is unfortunate enough to be in charge of the country's economic fortunes. The attack on the counter-insurgency methods used was something entirely new, and the ferocity of the official response gave some indication of the pain it caused to the authorities. "Those who sowed chaos now want judicial order," said the government spokesman, "forgetting that when they were in power they denied their enemies justice; abetted, sheltered, and applauded their 'special formations,' and freed the terrorist criminals who had been jailed."

The Peronists' problem in this area is that they have no moral authority. They had precious little compunction about making use of the extreme left and the fascistic Montoneros in battering

their way to power, and just as little in "liquidating" them after they had served their purpose. It was the Peronists, moreover, who institutionalized torture and murder in their first period in power, and many of them did their best to pick up in 1973 where they had left off in 1955. It is therefore unfitting for them to present themselves as defenders of human dignity against the men with the electric prods. This, however, may not render their current line any less effective. The Peronists have never been noticeably hindered by inconsistency or hypocrisy in the past, and their effort to seize the banner of human rights and make it their own may pay very handsome dividends indeed. Human rights, after all, are not just abstract concepts. They are an end to very definite things like arbitrary arrest and torture and murder in foul circumstances. In non-totalitarian countries, people who live under the threat of them for a prolonged period may appear to be cowed, but after a while they reach a breaking point and will do almost anything to get at their potential tormentors.

POLITICS & LABOUR

by James Neilson

The major political movement with the best record of all as far as respect for civic rights is concerned is the Radicals. Faced with a choice of denouncing Bittel's blatant opportunism and berating the government they seem to have opted for the latter. On Wednesday the left-wing Radical Raúl Alfonsín, who did his best for the victims of the latest onslaught long before the OAS mission arrived — in marked contrast not only to most Peronists but to most of his party colleagues as well — condemned oppressive activity by the state when it infringes the rights and the honour of individuals, and warned that unless the fanatics of both sides were soon brought to heel the country would suffer an "ethical collapse." Many would argue that the "collapse" occurred long ago and that we are now living the consequences, but Alfonsín seems to think there is still a chance to stop the rot before too many Argentines become completely dehumanized and "civilized forms of life" become perverted.

The Federal Party leader Francisco Manrique, who in the past has also warned

about the consequences of continuing along the present path, this time turned his guns on the Peronists rather than the government. Manrique blamed El Líder himself for preaching "crime, theft, and hate" from the balconies of the Casa Rosada. A large number of other figures also sped to attack Bittel, but some people expressed their complete solidarity with him.

Now that human rights have become, belatedly, a central issue around which not merely the political parties, but also the press, professional bodies, and economic organizations of various kinds are busily taking up public positions, the pattern of political debate in Argentina is in a process of accelerated change. Two camps are forming. In one are all those, mostly leftists and populists, who are asserting that the military are responsible for most of the miseries inflicted on the country during the last few years. In the other are those, mainly on the right or concerned primarily with economic matters, who think that the anti-subversion methods used were justified by the results obtained. But, as attention is bound to shift from the general to the particular as more details of what has been going on become known, it seems more than likely that the first camp will grow in size and the second will dwindle. It is easy enough to insist that "tough methods are necessary to wipe out terrorist subversion," but hard to shrug off all the horrifying details of what happens when "tough methods" are actually employed. How many people would still relish their beef steaks if they had to watch the animal's throat being slit and listen to its death agonies?

As people find out more of the unpleasant truth, their willingness to blame it on one easily identifiable cause will grow. This could lead to a dangerous new myth: that the sole cause of the country's miseries is the military. In the run-up to the 1973 elections a not dissimilar explanation of the country's condition was in fashion. Thanks to the bloodthirsty activities of the terrorists, this explanation was dropped and the terrorists got blamed for everything. Now that the terrorists

(continued on page 9)

Signet

Winds of change blow strongly

(continued from page 3)

have been for most practical purposes removed from the scene, the feeling that the military are the real culprits is returning once again. If it takes hold, as it well might, the effects could be disastrous. There is nothing much the country would gain from an intensification of hostility to the armed forces. Some political groups, however, could

POLITICS & LABOUR

expect to benefit from exploiting the hostility that already exists for all its worth. The idea of the country's democratic-minded citizens banding together and driving the military from po-

wer may possess a distinct appeal to the simpleninded, but as there is a real shortage of democrats in Argentina the result would almost certainly be a new period of government by authoritarian populist thugs if it succeeded or a long and destructive struggle if it did not. The armed forces are likely to be the decisive factor in the Argentine political equation for a long time to come, and to behave as though they could be safely removed would do nothing but harm to the country's prospects.

The avalanche of interest in human rights began with the arrival of the OAS mission. Many people hope or fear that it will end when it departs, with the military cracking down strongly on dissent. Some members of the armed forces may feel tempted, understandably, to try to put the cork back in the bottle. But they are unlikely to have any more success in this enterprise, should they attempt it, than they would have, had they decided to call the elections off in 1973. It is simple enough to speed up the political clock; extremely difficult to turn it back.

The OAS mission's presence may have inspired the labour union chiefs to mend some of their barbed-wire fences. On Monday the Committee of the 25 and the National Labour Commission (CNT) merged to form the United Leadership of Argentina workers, immediately known by its Spanish acronym CUTA, which should offer boundless opportunities to writers of satirical verse. The two union groups, one super-Peronist and the other simply Peronist, had been discussing ways of coming together for several months without success. Even CUTA does not include all the most muscular unions, with the insurance clerks, train conductors, and construction workers still being outside the fold. But despite the many rivalries that subsist just beneath the surface of the new high command, CUTA represents a big step in the direction of unity for the Argentine labour movement. The government, with its professional associations' legislation, has been trying to keep labour divided, and has sworn not to let the old CGT put itself together again. In the new political climate, however, the unions should be able to fend off any official attempt to keep them apart, so the effects of government legislation could boil down to nothing more than a change of name for a solid, politically-oriented, extremely powerful and increasingly militant labour movement determined to regain all its old privileges.

Sunday, September 16, 1979

CIDH winds up interviews

THE OAS Inter-American Commission on Human Rights (CIDH) yesterday ended the first stage of its visit here, granting the last requested interviews for the gathering of information on the human rights situation in Argentina.

Starting tomorrow the Commission will verify the reports it has received with government officials, the second and last stage of its stay here.

Yesterday the Commission met with representatives of various business associations who asked it to take an objective view of Argentine reality and briefed them on the attacks Argentine businessmen and their companies were the object of during the years of terrorist activity.

The Commission also denied a *La Nación* report yesterday which claimed that the Commission had met former President Héctor Campora.

There was another incident with a photographer who was taking pictures of journalists and persons waiting to enter the OAS building on Avenida de Mayo yesterday. The photographer was eventually as-

ked to leave by policemen posted at the OAS.

The mother of Argentine boxer Oscar Natalio Bonavena, murdered in the US two years ago, also went to the Commission yesterday to ask that it investigate her son's murder.

Domínguez de Bonavena was told that the Commission can only investigate cases where governments have violated the human rights of persons but that her request will be attended nonetheless.

It was pointed out to her that nothing could be done in her case by the Commission if there is proof that the government of the United States was not involved in Bonavena's murder.

The Corporation of Catholic Lawyers issued a statement last week saying it considers that "Argentines enjoy a reasonable degree of freedom and that human rights are sufficiently protected by the law and the country's authorities."

The statement, a response to the visit of the Commission, said that "individual cases of jailed or missing people are under investigation and will be cleared up".

Gral. Bussi denies being a candidate for 1984

Neuquen

GENERAL Antonio Bussi, head of the National Border Forces emphatically denied that he was a candidate for the presidency of the nation in 1984. "I cannot give an answer to something which makes no sense" Bussi said. He is here on a tour of inspection of border units in this area. Bussi told newsmen that he is mainly interested in carrying out his military duties. He reminded newsmen that army chief General Roberto Viola had announced that the next President to be installed in 1981 would be an officer of any of the three armed forces. He denied that the military junta was in the process of studying any plan to appoint an army officer as President after 1984, when the mandate of that appointed in 1981 ends. Some time back General Guillermo Suarez Mason, army chief of staff, had stated that in the process of national reorganization one more President from the armed forces would be appointed after that of 1981. (NA)

Aún al garete

(70). 74
BAH

UNO DE los mayores fracasos de este gobierno ha sido su incapacidad para modelar algo que se parezca a una política exterior coherente. La participación del país en la reunión de los "no-alineados" de La Habana, que estuvo acaparada por una riña entre comunistas por el contralor del Tercer Mundo, lo reflejó claramente. A pesar de la retórica oficial acerca de la herencia occidental de la Argentina y las frecuentes diatribas contra el marxismo ateo, no ha habido ningún cambio visible en la posición internacional del país desde el derrocamiento de Isabel Perón.

El representante del gobierno, comodoro Carlos Cavándoli, tuvo en Cuba ingrata tarea. Debía de hacer lo imposible para evitar decir algo que sonara a desafinado a la gente aquí, acostumbrada como está a las vividas definiciones de las ideas gubernistas acerca de la naturaleza de la lucha por el poder y la influencia en el mundo, y pronunciar un discurso que reforzase los títulos de la Argentina como miembro genuino del izquierdista e intensamente anti-occidental movimiento de los no-alineados. Con tal propósito en vista dejó de lado las referencias al marxismo ateo que son parte de la dieta normal consumida aquí, dedicándose en cambio a atacar el imperialismo de los Estados Unidos.

El argumento principal de la tesis Cavándoli consistió en que hacer de la cuestión de los derechos humanos un factor significativo de las relaciones internacionales era un grosero intervencionismo y, por lo tanto, otra suerte de imperialismo, tan malo como el militar de otrora y sus modernas variantes económicas. Ni que decir tiene que éste fue tema popular de una conferencia en la que muchos de los gobiernos representados se sienten autorizados a torturar o asesinar a quienquiera. La aversión de Cavándoli por el punto de mira de los Estados Unidos no le impidió, por otra parte, hacer algunas recomendaciones a Nicaragua. La reconstrucción de ese país — dijo — debiera de llevarse a cabo "en un clima de libertad, de plena vigencia del derecho y la participación de todos los sectores políticos" de la nación. Queda por verse si el gobierno cuyo vocero oficial expresó tan generosos sentimientos en La Habana adoptará un criterio semejante en lo doméstico, o si Nicaragua, después de una guerra civil que fue con mucho más sanguinaria que el conflicto desatado aquí por los terroristas, podrá otorgar derechos que es improbable se conceda a los argentinos en muchos años por venir.

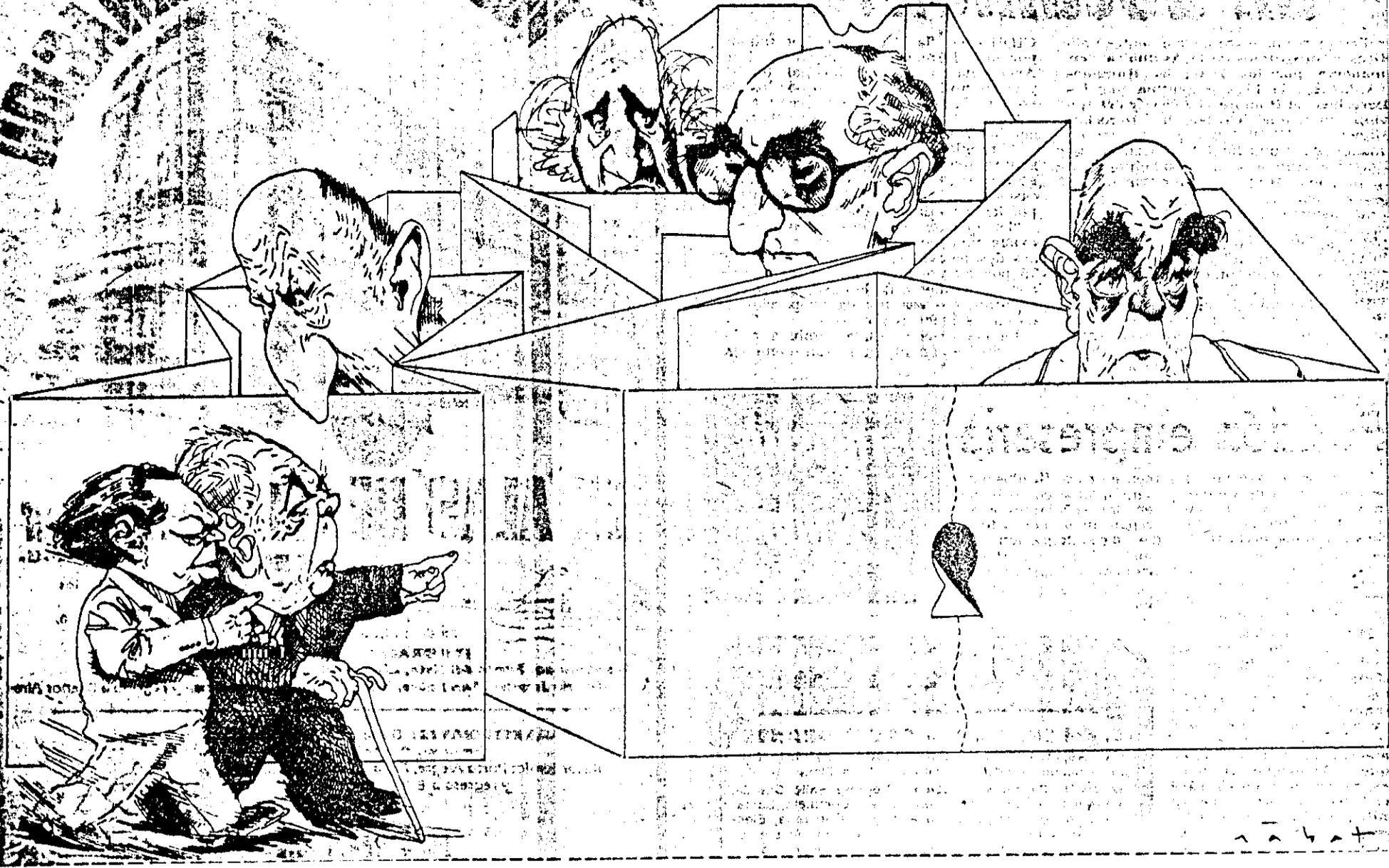
Fiel a la posición gubernista, enemiga de toda clase de intervención en los asuntos internos de países extranjeros, Cavándoli exigió también que se reconozca a los portorriqueños el derecho de decidir acerca de su propio futuro. Da la casualidad que Puerto Rico está asociado libremente con los Estados Unidos y que los habitantes de la isla tienen la ciudadanía estadounidense. Por añadidura gozan del derecho de expresar cada cuatro años su voluntad en comicios libres, en los que han manifestado reiteradamente tanto su deseo de mantener el presente estado de cosas cuanto el de obtener la condición total de estado de la Unión. En todas las elecciones quienes aspiraban a la independencia obtuvieron una humillante, infima cantidad de votos. En tales circunstancias, la implícita sugerencia de Cavándoli de que los Estados Unidos mantienen cautivo a Puerto Rico contra la voluntad de su pueblo fue en un todo tan impertinente como puede haberlo sido cualquier crítica del comportamiento interno de los argentinos por el Departamento de Estado. Los portorriqueños disfrutaban derechos democráticos denegados — debe decirse que por razones plausibles — a los argentinos, y rendirse a la atmósfera que dominó en La Habana e insinuar lo contrario no contribuyó a convencer a los observadores de que las declaraciones oficiales sean algo más que vacua retórica.

•The Buenos Aires Herald is published by the S.A. The Buenos Aires Herald Ltd. Com. Ind. y Fin. The postal address is Azopardo 455, 1107-Buenos Aires. Telephone: 34-8476, 8477, 8478, 8479, 8470. Cables to "Herald-BAIRES". The Herald is registered as a newspaper. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N° 1.438.143.

16-9-79

El eje de la escena

El eje de la escena



sigue =

Escritor Jorge Luis Borges; presidente de la CIDH, Andrés Aguilar; Deolindo Bittel; ex presidente Arturo Frondizi; ex presidente Alejandro Lanusse y Lorenzo Miguel.

En el juego de la esgrima, los contrincantes, al chocarse, se miran.

Por eso, cuando alguno de ellos intenta herir el corazón del adversario, ya no es esgrima, sino un duelo a muerte.

Es posible que esa no sea la mejor figura para describir lo que pasó en los últimos días entre el gobierno y el peronismo, pero debe reconocerse que en cierto modo se intentó trocar la esgrima por el duelo.

Un duelo que tal vez le sirva a unos y a otros, militares y peronistas, para ponerle paños fríos a la cabeza caliente del país político y ordenar las culpas compartidas.

Podríamos ensayar, en ese sentido, un análisis.

Hay un daño político real, del cual debe partirse: el documento de Bittel erizó, en un grado inédito hasta ahora, la piel militar.

Por qué?

Por dos razones simples:

1) El documento pone el acento, exclusivamente, en los excesos de la represión y no tiene en cuenta la amenaza de disolución nacional que constituyó, en su momento, la aventura subversiva.

2) Se refiere al gobierno militar como si fuera, poco más o menos, una fuerza de ocupación política, con lo cual cuestiona su legitimidad.

La legitimidad del gobierno, fundamentada en el "estado de necesidad nacional", había sido reconocida hasta ahora por todas las expresiones políticas argentinas, incluido el peronismo.

Esos dos datos del documento justicialista no pueden, como resulta obvio, ser fácilmente digeridos por el estómago del gobierno.

La digestión fue tan lenta y pesada que en su transcurso se analizaron muchas alternativas para responder a la declaración, aunque la más seria fue la de pasar la cuestión a la justicia, denunciando la violación de las normas que establecieron la veda política.

Finalmente prevaleció el criterio de ejercer solamente el derecho a réplica, sobre todo porque existe un compromiso del gobierno con la Comisión de Derechos Humanos de no practicar ninguna represalia sobre las personas que declaran ante ella.

De esa manera, con un documento oficial severo, se intentaba también enfriar el clima militar.

La respuesta del gobierno golpeó en la parte más débil del documento justicialista: en la ausencia de una autocrítica.

Debe reconocerse, en efecto, que la declaración de Bittel omite la trista recordación de la violencia cruel y sangrienta que encarnó en su momento López Bega.

También omite decir que la lucha contra la subver-

sión fue una reacción en defensa del Estado nacional, seriamente amenazado por la intolerancia ideológica.

Todo esto, claro está, explica el pasado hasta el momento del triunfo de las fuerzas nacionales, convirtiéndose en inexplicable lo que pueda suceder en adelante.

Resulta extraño que estos elementos no estén en ese documento, por el simple hecho de que fueron parte de una declaración que el mismo Bittel — junto con todos los sectores peronistas, el desarrollismo y los conservadores, entre otros — suscribió en agosto del año pasado.

En aquella declaración, analizando la guerra contra la subversión, se decía, por ejemplo, que "el indudable anhelo de orden que unía a los más diferentes sectores facilitó la tarea del gobierno y ayudó a disimular, sin justificarlos, los excesos que se han cometido".

Reconocía también "unánimemente a las Fuerzas Armadas la victoria obtenida contra las fuerzas subversivas, antipatrióticas y antinacionales", y enfatizaba: "Superada la etapa en que el Estado argentino debió reconstituirse como centro monopolizador de la fuerza legítima, nada autoriza a no devolver a todos el derecho a no tener miedo."

Pero hay dos párrafos de aquella expresión multipartidaria que tal vez expliquen muchas de las cosas que pasan hoy.

Uno: "Está llegando el momento de dialogar y el aporte de todos será garantía del éxito que el gobierno precisa y que la Argentina merece".

El otro: "La defensa nacional exige una participación activa del conjunto de la sociedad. Defender es, antes que nada, construir. Es decir, la actitud positiva de hacer fuerte lo que pretende ser atacado, de hacer indestructible lo que pretende ser destruido. Defender la Nación es construir la Nación".

Veamos el primer párrafo, aquel en el que la clase civil hace un claro reclamo de diálogo político.

Si se repasa lo que sucedió entre aquella declaración y ésta debe concluirse en que la conducta actual puede tener su razón de ser en la marginación a la que es sometida gran parte de la dirigencia política argentina.

Es común, por ejemplo, oír a los políticos decir que se acuerdan de ellos cuando los necesitan, generalmente cuando se afronta algún problema de orden internacional. Para lo demás, no existen.

Es posible que el gobierno no quiera dialogar con esta dirigencia política, hasta no comprobar que es realmente representativa, pero debe convenirse en que el camino de esa comprobación no empezó aún a recorrerse.

En un análisis realista no pueden desdeñarse los elementos anímicos personales que operan y entonces

debe recordarse que recientemente una comisión policial buscó a Bittel en el hotel donde se alojaba en Buenos Aires, en un momento en el que el dirigente peronista no estaba.

Por todo esto, cuando se haga el balance final de la visita de la comisión de la OEA, en su autocrítica el gobierno deberá anotar que faltó el diálogo entre él y las corrientes representativas de la política argentina.

En su favor podrá decirse que el documento de Bittel pudo conocerse porque han cambiado, para mejorar, las condiciones de la libertad de expresión.

No hace mucho era impensable suponer que un dirigente podía expresarse de esa manera en la Argentina.

Se sabe, por otra parte, que en la confección de su respuesta el gobierno intentó manifestarse de modo tal que no creara nuevamente la antinomia peronismo-anti-peronismo.

En tal sentido, habría habido una instrucción precisa del presidente Videla a los encargados de su redacción.

"No quiero agresiones a los ciudadanos, tengan la extracción política que tengan", habría dicho el Presidente.

Por eso, también, el documento oficial, más allá de su dureza, pone el énfasis en la declaración de la Junta cuando asumió el poder político y dijo que se trataba de una "decisión por la Patria que no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno".

Lo que desde el gobierno se intentó es diferenciar la cúpula peronista de sus bases.

Hasta qué punto lo consiguió?

Solo puede decirse, por ahora, que muchos de los dirigentes que se solidarizaron luego con Bittel tienen representatividad dentro de la estructura partidaria.

Pero hay que separar la paja del trigo y no suponer fácilmente que esa posible solidaridad de las bases se refiere a lo que taxativamente dice Bittel, es decir, al contenido y a las omisiones del documento.

Sería ingenuo — y falso — suponer que el país que respaldó a las Fuerzas Armadas en su lucha definitiva contra el terrorismo hoy varió para colocarse en juez implacable.

Puede haber, sí, cierto clima de insatisfacciones, de carencias reales y de escasas expectativas, que — consciente o inconscientemente — capitaliza de inmediato quien se ubica en la oposición a todo lo que representa esa situación.

Pero ya entramos en el otro párrafo de aquella declaración de hace un año, el que habla de la defensa y la construcción de la Nación.

Hay una realidad que es inocultable: desde que la

política

comisión de la OEA se asentó en Buenos Aires, el tema de los derechos humanos pasó a ser el centro de la cuestión política en la Argentina.

En otras palabras: el país torció la mirada hacia el pasado para encontrar elementos de excitación política.

Ha sido, por lo demás, un tema sobre el que se descolgaron los pronunciamientos más diversos.

Desde esa declaración del peronismo, que coloreó todo el cuadro político hasta la posición asumida por el ex presidente Levingston que cuestiona la gestión de la Comisión señalando que la Argentina no necesita "la indagación" para superar "situaciones derivadas de la extrema emergencia vivida durante la guerra interna que terminó con la derrota de la subversión armada".

Desde la prudente posición de la Iglesia, que se remitió a opiniones ya vertidas sobre los derechos humanos, en un enfoque global del problema, hasta el silencio del ex presidente Frondizi, quien ya —en otros momentos y con otras palabras— opinó sobre el tema para destacar la causa nacional que encarnaban las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión, pero también para advertir que la situación ha cambiado y que por lo tanto se deben, sin atenuantes, cambiar los procedimientos.

Desde el radicalismo, que pidió el esclarecimiento de "denuncias y episodios dramática e indiscutiblemente lamentables", hasta el ex presidente Lanusse, que reconoció que existió "una verdadera guerra, guerra interna, guerra sucia", pero comprendiendo y compartiendo, "en la medida de lo posible, las angustias y trágicas situaciones que están viviendo los familiares de las víctimas de la violencia, cualquiera que sea el origen o naturaleza de ésta".

Y así, todo el país se vio envuelto en una polémica sobre hechos que solo tienen el valor de la experiencia.

Cabe a esta altura parar la pelota y formular algunos interrogantes antes de seguir el partido.

¿Hubiera sido lo mismo con un país que advierte que desde la conducción se tratan de satisfacer sus elementales necesidades, con una clase política entusiasmada en el debate fundamental del porvenir y con una dirigencia sindical respetada y auténtica?

En ese hipotético país, ¿el problema de los derechos humanos no hubiera sido acaso un asunto limitado a las pequeñas minorías de déudos, inmersos en una sociedad dispuesta a absorber las consecuencias de un tramo trágico, desgarrado y superado, de su historia?

Valen la pena estas reflexiones, ya no para modificar el actual cuadro de situación con miras al informe final de la Comisión, sino para advertir lo que puede pasar en la futura relación de fuerzas internas de la Argentina.

En este orden de cosas, en la última semana se produjo otro hecho político decisivo: la unificación de la conducción gremial, que se había dividido a partir de 1976.

La decisión de disolver la C.N.T. y "los 25", para constituir una sola mesa directiva del gremialismo, significa que ha habido acuerdos entre los dos sectores, algunos públicos y otros no.

Si se tiene en cuenta que las reivindicaciones de uno y otro grupo han coincidido casi siempre —situación salarial, defensa de la industria nacional, ley de Asociaciones Profesionales—, se concluye fatalmente que los acuerdos deben referirse a los procedimientos. Más precisamente, a los procedimientos para luchar por aquellas reivindicaciones.

De cualquier forma, la unidad del sindicalismo modifica el cuadro político en tanto consolida la presencia de un sector importante y cambia el volumen de los interlocutores que hablan con el gobierno en nombre de los trabajadores. Ahora son, virtualmente, un solo bloque, salvada la dicotomía que debilitaba al sindicalismo.

Pero en esto, como en aquella colisión entre el gobierno y el peronismo, vale recordar que ya no quedan espacios para los que creen que todos los civiles, políticos o gremialistas, son réprobos imperdonables.

Tampoco queda lugar, —es cierto— para los que piensan que en la Argentina ha llegado la hora del antimilitarismo.

Una y otra son nada más que las antípodas del arco político.

CLARIN 16/9/79

Opinión de senadores franceses

Su deseo de que "la Argentina regrese a una democracia auténtica y al estado de derecho", expresaron ayer aquí siete senadores franceses al término de una misión de información realizada en este país.

El grupo, encabezado por Adolphe Chauvin (centrista oficialista), comenzó su misión de información el 8 de setiembre pasado y la finalizó ayer.

Además del senador Chauvin, la delegación estaba compuesta por el neogaullista Jacques Braconnier, el independiente moderado Jean Mézard, el socialista Robert Schwint, el radical de izquierda Josy Moinet y el comunista Charles Lederman.

En una declaración común, los senadores franceses condenaron "el terrorismo, venga de donde viniere", y señalaron que percibieron el profundo dolor provocado a los argentinos por el terrorismo.

El comunista Lederman precisó al respecto "que no es posible confundir el terrorismo de grupos descontrolados con el terrorismo de Estado", opinión que fue apoyada por Chauvin en nombre de todo el grupo de senadores franceses.

Chauvin destacó que la misión estuvo guiada permanentemente por su voluntad de "respetar al pueblo argentino" y precisó que "no vino a dar lecciones".

"En nombre de la amistad que nos une a la Argentina —expresó la misión francesa—, país afín a Europa, solo podemos desear que este país recupere la paz y la libertad."

Los legisladores franceses sugirieron al ministro del Interior argentino que decrete una amnistía, ya

que "semejante iniciativa traduciría concretamente la voluntad del gobierno argentino de volver al estado de derecho".

La misión reclamó que "se ponga fin a la angustia de los familiares de los desaparecidos" y que "se escuchen sus reclamos para que se aclare este doloroso problema".

Los parlamentarios franceses se entrevistaron con los ministros argentinos del Interior, general Albano Harguindeguy, de Justicia, Alberto Rodri-

ez Varela, y de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y con representantes de los principales partidos políticos y de todas las asociaciones humanitarias.

También reclamaron que se libere "lo más rápido posible" a los cuatro franco-argentinos actualmente detenidos y pidieron informaciones sobre los desaparecidos franceses, por cuya suerte se ha interesado en vano hasta ahora el consulado francés en Buenos Aires.

res, domingo 16 de setiembre de 1979 ★ CLARIN

Concluyó la Comisión

La CIDH puso fin ayer a la recepción de denuncias individuales y a sus contactos con organizaciones de la vida nacional, culminando la primera etapa de su visita al país. A partir de mañana mantendrá diversas entrevistas con autoridades del gobierno. Sus miembros realizaron una intensa actividad en la víspera en Buenos Aires. Distintos pronunciamientos.

Culminó en la víspera la primera etapa en los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al finalizar la recepción de denuncias a supuestas violaciones de esos derechos en los locales de esta capital y Tucumán. Luego de una pausa a la actividad oficial que abarcará toda la jornada de hoy, los miembros de la CIDH iniciarán mañana sus entrevistas con autoridades nacionales, que se prolongarán hasta el jueves, fecha prevista para que los juristas de distintos países americanos dejen el país.

Desde el jueves 6 del actual, cuando la Comisión se constituyó en Buenos Aires, sus miembros se han reunido con ex presidentes, autoridades eclesiásticas, dirigentes de entidades que defienden los derechos humanos, políticos, empresarios, profesiona-

les, sindicalistas y estudiantes. También recorrieron cárceles ubicadas en distintos puntos del país. Un subgrupo de la CIDH funcionó en la capital cordobesa entre el lunes y el viernes últimos, en tanto hizo lo propio otra delegación en Tucumán durante las últimas 48 horas.

◆ En la capital

Pasado el mediodía de ayer, el secretario ejecutivo de la entidad, Edmundo Vargas Carreño, informó al periodismo, en su habitual conferencia de prensa, que desconocía "los alcances del problema judicial planteado en torno del señor Deolindo Bittel" y consideró que "su dilucidación es de resorte exclusivo de la Justicia argentina".

Agregó, asimismo, que